

CUADERNOS DE COYUNTURA

Política | Sociedad | Cultura | Economía | Internacional

Número 17. Edición Otoño. Abril 2017.
www.nodoxxi.cl



CUADERNOS DE COYUNTURA

Año 5 | número 17

Publicación bimestral | Abril 2017

Fundación Nodo XXI

Santiago | Chile

www.nodoxxi.cl

Presidente_

Carlos Ruiz Encina

Director_

Sebastián Caviedes

Editor_

Alejandro Plaza

Equipo de Investigación_

Francisco Arellano

Camila Rojas

Daniela López

Carolina Olmedo

Rodrigo Oliva

Francisco Figueroa

Diseño Original_

Yovely Díaz Cea

Javiera Andrade

Diagramación_

Dai-Liv

Suscripción y contacto_

suscripciones@nodoxxi.cl

Impreso en_

Talleres de LOM Editores

*Más detalles sobre la construcción de índices y
el procesamiento estadístico de los datos visitar:
www.nodoxxi.cl*

CUADERNOS DE COYUNTURA

Nº17 · AÑO 5 · ABRIL 2017



NODOXXI
FUNDACIÓN NODO VEINTIUNO

LAS RENUNCIAS DEL PARTIDO SOCIALISTA

Editorial



Fuente: www.rbb.cl

A inicios del mes de abril, el Comité Central del Partido Socialista (PS) rechazó la consulta ciudadana que, tres meses antes, había ratificado para zanjar a su abanderado presidencial. Se resolvió, a cambio, traspasar la decisión al comité recientemente electo, liderado por la directiva que encabeza Álvaro Elizalde, reduciéndose con ello las opciones del sector a las candidaturas de Ricardo Lagos y Alejandro Guillier, luego del retiro forzado de José Miguel Insulza y Fernando Atria, únicos candidatos con militancia socialista. El argumento que sustentó esta decisión es el escaso apoyo que Insulza y Atria registraban en las encuestas, lo cual fue interpretado como falta de adhesión ciudadana.

Ante este escenario, el laguismo (y el propio Lagos) salió a reforzar la idea de que su opción garantiza la gobernabilidad y daría continuidad al proyecto histórico de la Concertación, al tiempo que contendría la amenaza de la Democracia Cristiana de llevar un candidato propio, pues solamente con Lagos podría realizarse una primaria que evite una división de fuerzas que favorezca a Sebastián Piñera. Pese a esta arremetida, la balanza finalmente se inclinó en favor de Guillier, propiciando la renuncia del ex mandatario a su aspiración de llegar nuevamente a La Moneda.

Pero, y por encima del desenlace de esta polémica, el entramado de acciones antidemocráticas que se han sucedido en la interna del PS, evidencia la crisis que allí ha estallado como síntoma de su desconexión con la sociedad y con su propia militancia de base. Y es que, más allá de un refichaje exitoso -no obstante, en deuda con su historia-, en el Partido Socialista los grupos internos vienen siendo, desde hace años, menos corrientes o tendencias políticas con diferencias ideológico-programáticas, que "lotes" de orientación pragmática, funcionales a la organización del poder interno y a la distribución de roles, cargos y candidaturas sujetas a elección ciudadana o a la burocracia estatal. En esa lógica, la máquina clientelar construida en torno a esta estructura -compuesta de redes de índole estatal, municipal y parlamentaria- ha venido bloqueando posibles alternativas de conducción, en paralelo al vaciamiento social que se profundiza desde los años noventa. Así, que las encuestas se erijan en base de justificación de decisiones autoritarias como las adoptadas con la consulta ciudadana, no debiese sorprender; del mismo modo, tampoco debiese hacerlo el que se asuma esta herramienta como base para la construcción de liderazgos propios al interior de la tienda.

Renunciar a la democracia interna, como lo ha hecho el PS, es consecuencia de una renuncia previa a construir un proyecto político. Y allí que, la despolitización y el desplazamiento burocrático de la deliberación política de sus bases, no es más que un síntoma de aquello. Pero, si es que se establece como problema central de su estrategia y práctica políticas la conquista o retención del poder (y no la aplicación de un programa o la instalación de una visión de mundo), significa que también se ha renunciado a convocar y a representar a las mayorías, pues, en el contexto de alta desafección política que Chile enfrenta, lo anterior implica apenas luchar por obtener la mejor tajada de una torta electoral cada vez más pequeña. Como consecuencia, y en último lugar, el “partido de los trabajadores manuales e intelectuales” renuncia a su propia herencia democrático-revolucionaria, rica en debate y pensamiento propio, y a su tradición electoral y de masas.

De ahí el reconocimiento a los intentos de facciones del PS -como Izquierda Socialista y el Frente Allendista- por actualizar la construcción de ese proyecto y por intentar, en ese mismo sentido, que el mecanismo de primarias no sólo sirviera para fortalecer la posición del PS en la negociación parlamentaria de la Nueva Mayoría o en un eventual nuevo gobierno, sino para iniciar el restablecimiento del vínculo del partido con la sociedad y sus militantes. Aun así, la forma en que éste y otros intentos han sido marginados, en consonancia con las renunciaciones que viene acumulando el Partido Socialista a su vocación política, sus militantes y su historia, demuestran que aquél ya no es el lugar desde donde se puede proyectar una izquierda que haga frente a los desafíos existentes.

Ciertamente, se necesita de un nuevo referente que responda a este vacío que deja la izquierda histórica. Sin embargo, esa respuesta todavía está en proceso. Los meses venideros dirán si el proceso programático -político y social- propuesto desde el Frente Amplio, logrará ser radicalmente democrático. Aspecto que se medirá menos en la rentabilidad mediática de ciertas candidaturas, y más en la capacidad de articulación y protagonismo de fuerzas sociales vivas que brinden un soporte de largo plazo a un nuevo proyecto histórico para Chile. En ese esfuerzo, los genuinos socialistas, que vienen luchando y han sido desplazados, tienen un espacio para retomar las banderas que alguna vez les arrebataron. ▼

“Renunciar a la democracia interna, como lo ha hecho el PS, es consecuencia de una renuncia previa a construir un proyecto político. Y allí, la despolitización y el desplazamiento burocrático de la deliberación política de sus bases, no es más que un síntoma de aquello.”

LA CULTURA POLÍTICA DE LA GENERACIÓN 2011

Francisco Arellano



Fuente: Frente Amplio

RESUMEN:

Este artículo aborda los gérmenes de cultura política que porta la generación que viene de las movilizaciones de los años 2006 y 2011. A partir de una reflexión sobre la asamblea como forma de organización, se analiza su impacto en las concepciones de democracia, debate, representación, transparencia y conducción política. Junto con ello, se desarrollan algunos elementos de cultura política para la construcción de una organización política transformadora.

PALABRAS CLAVE:

- Cultura política
- Generación 2011
- Movimiento estudiantil
- Asamblea
- Democracia

La conformación del Frente Amplio ha sido recibida con interés e, incluso, entusiasmo en diversos sectores de la sociedad chilena. La posibilidad de que surja un nuevo conglomerado político, encabezado por varias de las figuras que surgieron del movimiento estudiantil, señala una oportunidad histórica para revertir el cierre de la política pactada en la transición a la democracia chilena.

Sin embargo, la tarea de convertirse en una fuerza política con capacidad de alterar el curso histórico de una sociedad, no es nada de sencilla. La historia de nuestro país es rica en aventuras generacionales, que irrumpen rebelándose contra el orden existente en su tiempo, y que luego terminan siendo incorporadas a la administración del mismo orden contra el cual se rebelaron, o son desarticuladas.

No existe ningún recetario para resolver este asunto de antemano. Cada generación debe buscar y formular sus propias respuestas. Hacerlo, implica construir una fuerza social y política con verdadera autonomía del orden existente, es decir, con una mirada propia y colectiva de la sociedad en que habita, consciente del interés social que se representa. Dicha autonomía es la que permite concebir un pensamiento y curso de acción eficaz para desarmar el complejo entramado de relatos, instituciones, sentidos comunes y prácticas que están constituidos, precisamente, para evitar que el orden vigente sea alterado.

En estos primeros meses tras su constitución, el Frente Amplio ha dado ciertas señales que merecen ser miradas con atención, con el fin de alertar comportamientos o prácticas que deban ser trabajados. Una cosa es declarar que se pretende superar a la Concertación y la “vieja política”, y otra cosa es efectivamente hacerlo.

La primera señal de preocupación son los quiebres internos que han vivido varias de las organizaciones que vienen de la generación 2011. Más allá de los argumentos esgrimidos por cada sector, el hecho de que Izquierda Autónoma -de cuyo quiebre nace Movimiento Autonomista-, Nueva Democracia e Izquierda Libertaria hayan sufrido quiebres significativos entre sus liderazgos, señala una dificultad general para resolver democráticamente las diferencias legítimas que existen al interior de toda organización política. También lo es la conducción a base de golpes mediáticos que ejercen Gabriel Boric y Giorgio Jackson. Fuera de la valoración de la decisión de excluir a Alejandro Navarro como candidato, y la de levantar a Beatriz Sánchez, difícilmente se podrá construir una alianza sólida sin discutir y resolver colectivamente estos temas. Por último, no puede ser sino signo de preocupación, el hecho de que ambos diputados se abstuvieran el año 2016 en la votación de la partida de presupuesto para la política de gratuidad en educación del Gobierno, a pesar del llamado de las organizaciones estudiantiles a votar en contra. Esto evidencia un distanciamiento del proceso social de donde vienen estos diputados, lo que tampoco es reemplazado por la afirmación de algo distinto, pues su abstención más bien señala su neutralización como actores políticos.

El objetivo de este artículo es indagar en algunos de los rasgos de cultura política que porta la generación que viene de las movilizaciones 2011, es decir, definir y caracterizar las concepciones y prácticas políticas que emanan de esa experiencia de movilización. Con esto, se busca iluminar posibles fortalezas y debilidades heredadas de esa experiencia, a modo de contribuir al debate sobre los desafíos que debe enfrentar el Frente Amplio, si desea producir reales cambios en Chile.

I. EL PESADO LASTRE DE UNA CONCIENCIA ASAMBLEÍSTA

Un componente fundamental del Frente Amplio es la generación que emerge de las movilizaciones universitarias del año 2011. Varios de los otrora colectivos universitarios se han constituido como movimientos políticos y, a pesar de que han buscado convocar a otros segmentos y sectores de la sociedad, etaria y socialmente hablando, la mayoría de sus miembros y de sus conducciones viene de esa experiencia.

El movimiento universitario que irrumpe el año 2011 no se constituye en el vacío. Al interior de las universidades y de los liceos existía ya un movimiento estudiantil. Este era encabezado en parte importante por las juventudes del Partido Comunista, pero donde también tenían un lugar todas

las juventudes de los partidos que se inscriben después del plebiscito del '88. En gran medida, los movimientos de los años 2006 y 2011 son una reacción contra el contenido y forma que esas organizaciones políticas construyeron¹.

La razón es sencilla. La estructura de las juventudes de los partidos, particularmente los de la Concertación, ofrecía un espacio de participación formal, mas no una vía para canalizar las demandas corporativas propias de la base estudiantil. La solución definitiva al problema del crédito universitario, y más significativamente, la demanda de educación pública, gratuita y de calidad, simplemente no era procesable por el sistema de partidos. Al contrario, en su propio proceso de descomposición y desarraigo de la sociedad, éstos se convirtieron en una gran agencia de empleos estatales, donde no tenían cabida las demandas de los estudiantes.

Lo propio ocurre con el Partido Comunista, que a pesar de encontrarse fuera de la Concertación, prioriza una agenda partidaria que reiteradamente posterga y desplaza las demandas de los estudiantes. Emblemáticas, en este sentido, fueron las movilizaciones universitarias del año 2002, que el Partido depuso en el marco de sus propias negociaciones con el gobierno, y que significó el quiebre con la generación de juventudes comunistas que habían reorganizado la Fech, y que renunciaron al partido.

De este modo, al enfrentarse con las dirigencias y partidos presentes en el movimiento, que se habían mostrado ineficaces para dar solución a las demandas materiales de su base social, los estudiantes se volcaron a la forma más básica y primitiva de organización: la asamblea. Es la elemental invocación al soberano. Esta asamblea es horizontal y de carácter permanente porque sus premisas fundantes son la igualdad de sus integrantes, no hay jerarquía o cargo que los distingan, y su condición de soberano implica que, en potencia, siempre que sea necesario la asamblea puede y debe ser convocada. Fue en el curso de este proceso de maduración, que parte a mediados de los noventa, y arrastra toda la década de los dos mil, que la polaridad entre representantes y asamblea se constituyó en una de las dicotomías fundantes de la oposición entre “vieja política” y los “nuevos movimientos sociales”.

Este giro, desde una estructura más cercana a los partidos hacia la asamblea, se experimentó por toda una generación como un gran avance democrático. Y en cierto sentido lo fue. Tanto el contenido de la demanda, como su radicalidad en términos de la forma de la movilización (la disposición a estar un año en paro, como en el caso del 2011) no tenían cabida en la estructura de representación ofrecida por las juventudes de los partidos de la Concertación ni el Partido Comunista. De este modo, a través de la asamblea, se constituyó por primera vez, desde el retorno a la democracia, una organización estudiantil de los estudiantes para los estudiantes.

El impacto social y político de las movilizaciones de 2006 y 2011 llevó a una generación (que en muchos casos eran literalmente las mismas personas, primero como secundarios y luego como universitarios), a concebir como estrechamente vinculados el cambio organizacional (partidos por asamblea) con el éxito alcanzado. Los valores asociados a este cambio: horizontalidad, transparencia, democracia directa y rendición de cuentas, se convirtieron, para esta generación, tanto en la base misma de la democracia, como en el camino del éxito político.

Los valores que se extraen de la experiencia asambleísta constituyen uno de los componentes centrales de la incipiente cultura política de la generación 2011. La ausencia de otras experiencias políticas, la carencia general de formación política en la sociedad chilena, y el fuerte rechazo a los partidos de la transición, forja, por la vía de la experiencia sentida de quienes participan en ese ciclo de movilizaciones, la base de la cultura política con la que luego se lanzan a construir el Frente Amplio. Desentrañar esa cultura, permitirá reconocer las fortalezas y debilidades de esa generación, y cuestionarse sobre si aquella base es suficiente para construir organizaciones políticas transformadoras.

1 Para un análisis detallado de este proceso, y las reflexiones de los dirigentes que originalmente promovieron el giro asambleario ver Thielemann, L. (2016). *La anomalía social de la transición. Movimiento estudiantil e izquierda universitaria en el Chile de los noventa (1987 – 2000)*. Santiago: Tiempo robado editoras.

La premisa fundante de la concepción de “democracia” de la generación 2011 es que la democracia está en la asamblea, pues ahí está el soberano en su estado “natural”, sin mediación. Por tanto, las decisiones de la asamblea son “democráticas” en su forma más directa e inmediata. De este modo, la asamblea se presenta como más democrática que cualquier otra forma de organización, pues no hay mediación de la voluntad del soberano por representantes.

El problema con la democracia asamblearia es que, mientras efectivamente hay una representación directa del “sentir” mayoritario, es muy poco democrática en términos de permitir un debate claro y ponderado sobre las alternativas en disputa. La situación de masas que se experimenta en la asamblea, dificulta enormemente el adecuado desarrollo y deliberación sobre cada una de las posiciones que se presentan ante ella. En cambio, lo habitual es que se imponga la postura que mejor interpreta emocional y retóricamente a los asistentes, sin una adecuada discusión de las implicancias de cada una de las posiciones.

La discusión sobre las limitantes democráticas de la asamblea es tan vieja como la forma asamblea misma, pero en este caso es relevante observar, especialmente, las particularidades que esta forma de organización toma en manos de hijos de la transformación económica de la dictadura, y la democracia pactada de la transición.

II. APRENDER A CONSTRUIR COMUNIDAD POLÍTICA

A pesar de su aporte en términos de convocatoria, lo cierto es que la forma asamblea no permitió reflexionar en detalle los distintos cursos de acción del movimiento. Imposibilitados de cuestionar su legitimidad, pues era la premisa fundante del mismo movimiento, los dirigentes optaron reiteradamente por alcanzar acuerdos del carácter más amplio posible en las asambleas, a modo de luego poder resolver con sus grupos de confianza los cursos efectivos de acción. Como nunca existió la posibilidad real de una negociación con el gobierno remotamente cercana a las demandas de los estudiantes, el movimiento nunca se vio sometido a la necesidad de resolver entre posiciones verdaderamente complejas.

Esta forma de organización, eficaz para producir el impacto que tuvo el movimiento estudiantil en la sociedad chilena, porta profundas deficiencias al momento de construir una organización propiamente política. La primera es que, al equiparar la democracia con la asamblea, se prioriza una concepción de democracia centrada en la experiencia de los participantes de sentirse en un “momento democrático”, por sobre la construcción de un entendimiento racional entre los miembros de una colectividad de los argumentos detrás de cada postura. Lo que se gana en términos de cantidad de apoyo a una propuesta, se pierde en la calidad de la adhesión y profundidad de compromiso de cada individuo a esa posición.

El efecto más general, cuando se naturaliza la concepción de lo democrático que deriva de la asamblea, es que se pierde de perspectiva la importancia, y la dificultad, de debatir para construir posiciones sólidas y verdaderamente vinculantes. La asamblea incentiva la utilización de ideas sencillas, fáciles de expresar en medio del tumulto, y construidas a partir de los presupuestos que los participantes ya tienen sobre los temas que se están tratando. Una idea que contradice esos presupuestos, una idea “contra-intuitiva”, ajena a los supuestos que porta el sentido común sobre una discusión, y que, por tanto, requiere ser debatida y procesada para poder ser valorada en su propio peso, tiene mucha dificultad para hacerse un lugar en la asamblea.

En una asamblea, la posición que más probabilidades tiene de imponerse, sin importar su contenido concreto, es aquella que conecte emotivamente con el auditorio, a partir de los sentidos comunes y presupuestos que ya carga la audiencia. Al equiparar esta forma de adhesión a la democracia, se construye una concepción que es reactiva de la idea misma del debate, porque la experiencia concreta vivida por quienes experimentan la asamblea es que es posible lograr la unidad de la multitud a partir de ideas no contradictorias y fácilmente disponibles. El proceso de construir comunidad y estrategia política a través del diálogo, desentrañar lo bueno y lo malo de ideas que son contradictorias entre

sí, y tratar de producir a partir de ello nuevas ideas, es visto como un obstáculo para construir esa unidad. Quien promueve el debate y la discusión puede incluso llegar a ser visto como alguien que busca destruir la unidad de la asamblea.

Estas características de la asamblea no deben ser valoradas como buenas o malas a todo evento. Claramente, para efectos del movimiento 2011, tuvieron un impacto movilizador y democratizante, y en ese sentido, fueron virtuosas. Sin embargo, cuando la tarea es construir una organización política, y más aún, una organización política cuyo fin es transformar la sociedad, es vital revisar los supuestos de cultura política que subyacen a estas prácticas, pues sino, la construcción de la organización será ciega a los mismos principios que portan sus miembros. Estos presupuestos incluso pueden ser contrarios a los fines declarados por la organización.

La izquierda, inmersa en la grave y profunda crisis de incidencia que la afecta a nivel mundial por ya casi cuarenta años, necesita debatir. Y mucho. Reconstruir la historia de sus luchas, caracterizar la forma concreta de capitalismo vigente, tomar conciencia de las formas culturales en las que se expresa el poder, reconocer las grietas del orden existente y construir una táctica y una estrategia coherente con estos diagnósticos, son todas discusiones abiertas y pendientes en la izquierda². Para ellas no existe una respuesta rápida, y que requieren de mucho trabajo y debate para siquiera empezar a echar luces al respecto.

Desafortunadamente, la experiencia de las movilizaciones estudiantiles contribuye poco a forjar una verdadera práctica de confrontar ideas constructivamente. Una discusión edificante parte de la base de escuchar el argumento del contrario, y debatir con la mejor versión de dicho argumento, con el fin, no de ganar la posición propia, sino de producir la mejor idea común para todas las partes que participan de la comunidad. Al contrario, la práctica de la asamblea incentiva a debatir con la caricatura de la posición del rival, pues resulta el camino más eficiente para desacreditarlo ante la multitud. Nos guste aceptarlo o no, la generación 2011 porta con un déficit negativo en términos de hábitos para construir comunidad política.

III. LA REPRESENTACIÓN Y LA DESCONFIANZA

Del mismo modo que la movilización 2011 instala una determinada concepción del proceso democrático, lo propio ocurre con la idea de representación. Al constituirse la movilización en oposición a las estructuras y dinámicas existentes en el movimiento estudiantil, también lo hace con una fuerte oposición a la figura del representante “desanclado” de las bases sociales.

La experiencia de los años noventa y dos mil instala en el movimiento estudiantil una fuerte desconfianza hacia los representantes. La autonomía relativa de los representantes —la delegación— se convierte en la posibilidad de que el representante actúe siguiendo su interés personal o partidario, y no el interés de la base estudiantil. Producto de lo anterior, se construye la convicción de que en la medida que no exista control social directo sobre el representado, siempre actuará sobre la base de un interés ajeno al de la asamblea. Esta idea se realiza mediante el reemplazo de la figura del representante por la del vocero. Despojado de ideas o pensamiento propio, el vocero debe reproducir de la forma más literal posible el mandato de la asamblea.

Esta forma de concebir la representación trajo réditos importantes para el movimiento. Permitió convocar a muchos desencantados con la política de la transición, que vieron en estas concepciones más cercanas a la idea de la democracia directa, el camino para reapropiarse de la política. Sin embargo, esta desconfianza de la representación, también tiene impactos negativos en términos de cultura política, particularmente, en la posibilidad de construir una organización política madura y capaz de proponerse desafíos complejos.

² Para profundizar sobre táctica y estrategia se recomienda las charlas de la escuela Eugenio González Rojas, disponibles en <http://www.nodoxi.cl/escuela-de-formacion>

La representación se basa en la confianza. La asamblea, en cambio, se basa en la desconfianza. La horizontalidad y el carácter permanente impiden que alguno de sus miembros utilice el espacio político para fines privados: siempre debe volver a rendir cuentas a la asamblea. Nuevamente, esto fue efectivo para convocar a una base social altamente desconfiada de sus representantes: ya no necesitaban confiar, desde la asamblea podían controlarlo todo directamente.

Este principio de la desconfianza en la política es expresión de un sentido común más amplio en el que se incluyen todas las relaciones sociales. En el nivel de lo intelectual, este es el principio con que el pensamiento económico ha colonizado todas las otras formas de mirar lo social³. Y, en el nivel del sentido común, es la estrategia mediante la cual se sigue dividiendo a los sectores subalternos. La expresión más extrema de esto último es el miedo, el miedo al otro, al vecino, a los representantes, es la paranoia con que se sostiene el neoliberalismo⁴.

En el caso específico que estamos revisando, esta concepción de representación basada en la desconfianza, impide superar la forma primitiva de la asamblea horizontal y permanente. Construir confianza, que es la base de toda asociatividad, es quizás uno de los mayores desafíos que se puede proponer una organización humana, pues supone que las personas pueden efectivamente entenderse las unas a las otras, y forjar pactos. Esto no es algo dado, sino que requiere un esfuerzo colectivo por debatir, agotar las diferencias y resolverlas democráticamente. Esta práctica no es posible producirla en una situación de asamblea.

Lo mismo ocurre con la transparencia. Base de un entendimiento claro y de la construcción misma de confianzas, la transparencia puede devenir recurso perverso, cuando se concibe desde la premisa de que la confianza es imposible, y por tanto, de que todo debe ser transparente. Esto deriva en la formación de organizaciones con burocracia y procedimientos panópticos, para permitir que cada individuo pueda ver por sus propios ojos cada instancia y momento de la organización. Además de lo ineficaces que son estos procedimientos, la transparencia absoluta impide un debate sincero de posturas, como explorar discusiones o alternativas que no son populares, pues el ojo vigilante obliga a priorizar el aplauso de la galería.

Sumado a lo anterior, una apropiación no crítica de la cultura política de la asamblea, produce una concepción sumamente individualista de la representación. Se pierde de vista que el representante es representante de una colectividad, de un todo que es más que la suma de las partes y, en cambio, se busca la representación de lo particular, de cada persona, a través del representante. La falta de autoconciencia sobre lo imponente de la cultura individualista en nuestra sociedad, y la forma en que nos constituye a cada uno de nosotros, hace que se pierda de vista cuán capaz es de reinterpretar la idea misma de representación. No hay colectividad, solo pequeños pedazos inconexos, individuos, que buscan su reflejo en el espejo de la representación. Así, se dificulta enormemente la representación de un proyecto colectivo, para que decir histórico, pues la demanda del individuo es permanentemente ver su parcialidad reflejada en lo general.

Semejante problema es el que ocurre con la idea de conducción. El desarme político general de nuestra sociedad, implementado por la dictadura y continuado por la Concertación, vuelve inconcebible una de las ideas que más le costó forjar a la izquierda en su propio proceso de maduración durante el siglo XX: la necesidad de construir una mirada común sobre la totalidad social para poder definir un curso efectivo de acción política. Esto presupone asumir que la experiencia individual, parcial y local, es siempre insuficiente para construir un diagnóstico y una acción política efectiva para intervenir en el conjunto de las correlaciones de fuerzas que forman un orden social. Por lo tanto, una organización política debe apostar a constituirse como un intelectual colectivo, donde sus componentes aportan desde la experiencia y parcialidad que cada uno representa, no para buscar la solución del problema individual de cada uno, sino para construir una mirada común sobre el escenario político, a partir de la cual definir un curso de acción coherente con el interés colectivo de la organización.

3 Lechner, N. (2002). *Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política*. Santiago: Lom Ediciones.

4 *Ibid.*

Semejante reflexión es imposible si se naturaliza la forma asamblea como base de la construcción de una organización política. Al contrario, los partidos socialista y comunistas chilenos durante el siglo XX, a modo de ejemplo, hicieron enormes esfuerzos por formar y resguardar a sus miembros más orientados a construir esta mirada de la totalidad, a modo de construir una dirección política y conducción efectiva sobre la lucha política. No se trata de establecer una división de funciones que extraiga la soberanía del militante de base, pero sí reconocer el rol de la conducción, tanto en el deber como en la necesidad de producir esa mirada sobre el escenario global, y nutrir de ella el resto de la organización.

IV. CONSIDERACIONES DE CULTURA POLÍTICA PARA UNA IZQUIERDA DEL SIGLO XXI

El sentido de este artículo no es renegar de la asamblea. Como una forma de organización más, debe ser siempre una herramienta disponible para toda organización social y política, reconociendo sus virtudes y desventajas. No se trata, tampoco, de alterar la forma en que se organiza el mundo social. Varias de las dinámicas tratadas aquí seguirán siendo habituales en las organizaciones sociales y de base, y no debe negarse su rol fundamental en construir cimientos para la organización general de la sociedad. El punto es que la tarea de construir una organización política orientada a transformar el modelo social y económico de una sociedad requiere, entre otras cosas, preguntarse sobre cuál es la cultura política necesaria para lograr dichos cambios.

El camino de la generación 2011 recién comienza. La experiencia de las movilizaciones vividas marca un sello fundacional que le entrega a esta generación mucha de su fortaleza y determinación para abordar el presente. Dicha impronta, debe ser el sustrato rebelde que oriente su maduración como proyecto histórico. Avanzar en esa dirección, requiere siempre un ejercicio de humildad y desentrañamiento, que permita tomar conciencia de la forma en que precisamente aquello que se quiere cambiar, anida en uno mismo, y que el primer paso para cambiar la realidad, es constituirse en el sujeto colectivo que pueda proponerse realizar esa tarea.

Reflexionar sobre la herencia del ciclo de movilizaciones estudiantiles es un primer paso para proponerse seriamente devenir en proyecto político. Asumir el déficit negativo en términos de cultura y práctica de debate democrático permitirá abordar, en toda su complejidad, el desafío de construir organizaciones democráticas en un sentido sustantivo, más allá de los eslóganes y el recurso *ad nauseam* de la democracia procedimental. Del mismo modo, esta generación debe elaborar sus propias concepciones de representación, transparencia y conducción, a partir de un debate ponderado sobre cuáles son las formas y procedimiento que de mejor manera permitirán orientar la acción colectiva hacia lograr efectivamente transformar la realidad.

Ninguno de estos temas tiene respuestas preestablecidas. Es importante estudiar la historia de las luchas pasadas, no para copiar sus soluciones, sino porque ahí encontraremos hombres y mujeres que en su propio momento se hicieron estas mismas preguntas, y cuya experiencia y argumentos permiten nutrir nuestra propia reflexión. A la vez, el ejercicio de tomar conciencia sobre las prácticas que reproducimos de nuestra sociedad neoliberal y machista no es algo que pueda resolverse individualmente. Solo asumiendo colectivamente el desafío de ser autoconscientes, podremos construir los hábitos y las prácticas que nos permitan empujarnos los unos a los otros a tomar conciencia sobre nuestros propios sesgos y limitaciones. Hacerlo requiere asumir como generación la difícil tarea de aprender a debatir y a entendernos. Es la base de nuestra emancipación. ▼

Lucha feminista: **APORTES DESDE LA IZQUIERDA MILITANTE**

Camila Rojas • Daniela López



Fuente: www.agenciauno.cl

RESUMEN:

Este artículo pretende rescatar la lucha feminista relevando su carácter estructural y resaltando su profunda consistencia. Además de dicho recorrido histórico mediante estas líneas se pretenden ahondar en aquellas tensiones que han cruzado al movimiento, dibujando reflexiones y entendiendo la importancia de volver a revisar cuantas veces sea necesario los nudos que lo cruzan; contribuyendo así a no evadir la elaboración de la práctica política de la emancipación de las mujeres. Finalmente se conjugan las posibilidades y desafíos que hoy tenemos las feministas de la izquierda en general y de la izquierda partidaria en particular. Los lineamientos de este artículo están situados en la teoría y la práctica feminista desde la arena de la izquierda militante.

PALABRAS CLAVE:

- Feminismo
- Izquierda
- Tensiones
- Democracia
- Soberanía

I. CONTENIDO ESTRUCTURAL DE LA LUCHA FEMINISTA

Tempranamente Alexandra Kollontái propuso que el sostén del socialismo y la liberación total de la humanidad no tendrían como única causa la abolición de la propiedad privada, ya que también una revolución de la cotidianeidad, basada en una nueva concepción del mundo y una nueva relación entre hombres y mujeres sería necesaria. Y es que, contra toda intuición, Kollontái defendió, lo que valió duros enfrentamientos ante sus propios compañeros – que las bases de la emancipación de las mujeres no vendrían de inmediato con la conquista del poder político por parte del proletariado, sentando como condición de la liberación de la humanidad y de la revolución socialista la necesaria liberación de las mujeres. La vieja -pero remozada y renovada cada cierto tiempo- idea de que la lucha de las mujeres es accesorio y que la cuestión de las mujeres se resuelve con la superestructura, era cuestionada desde lo más profundo¹.

Con las posteriores luchas, acompañadas de la elaboración del concepto de patriarcado, la pugna entre clases sociales dejó de ser la explicación exclusiva de la opresión humana. La opresión sexual y la dominación de un sexo sobre otro comienzan a visibilizarse y a revelar situaciones vividas por las mujeres desde la vida misma, pero acalladas en generalizaciones e interpretaciones difusas construidas por otros. Con esta complejización, el feminismo puso en jaque las restricciones de la liberación, siendo capaz de ser una lucha muy lejana a parcialidades.

II. DE LA CONSISTENCIA FEMINISTA

La liberación de las mujeres y la reivindicación de sus derechos son las luchas fundantes del feminismo. La heterogeneidad propia del movimiento feminista y los múltiples contenidos y disputas que ha desarrollado, invitan a rescatar la historia, a profundizar nuestras tensiones y a seguir realizando y apropiándonos de nuestras propias luchas, sin centrarlas en cuantificaciones de participación en espacios formales, sino que por el contrario, rescatando la rebeldía y contestación a un orden que nos entiende y trata como inferiores.

Dentro del rescate histórico, cabe resaltar cómo la teoría y la acción, el pensamiento y la práctica han tenido una relación intrínseca a lo largo de la historia del movimiento. Dicho vínculo es fundamental si se pone en consideración que con el correr de los siglos, éstos han tomado carriles paralelos en todo tipo de luchas, que impiden visiones y peleas estructurantes y han afectado el curso de la historia.

A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX se desarrolló la denominada, desde la academia activista, primera ola del feminismo, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos, pero también en otras regiones del mundo como Latinoamérica. La lucha feminista de aquel entonces se halló principalmente en la igualdad respecto de los hombres, quienes hasta ese entonces eran propietarios exclusivos de derechos civiles y políticos. Por ello, el foco estuvo puesto en la obtención del voto y el acceso a la educación formal.

Desde la segunda mitad del siglo XX, y hasta fines del mismo, se desarrolló la segunda ola feminista, centrada en la lucha que habitaba espacios más allá de las formalidades: la reproducción, la familia y el trabajo. Dicho debate abrió discusiones en torno al tratamiento diferenciado que recibimos hombres y mujeres no solo respecto del acceso sino de aquellas labores que se nos asocian como naturales, además las peleas por la anticoncepción y el aborto también fueron frutos de la reflexión y organización.

Finalmente la tercera ola feminista comienza a finales del siglo XX y se desarrolla hasta la actualidad, desglosando las múltiples formas de ser mujer, atravesada por la clase y la raza principalmente y que buscan ir más allá de la representación de la mujer blanca, heterosexual y de clase alta sobre la cual se había teorizado hasta entonces. Nuevas disputas permitieron ampliar el espectro de la lucha feminista y dar impulso tanto a su condición estructural como específica, en las historias de las mujeres.

¹ Kollontái, A. M., Lenard, M., & Heinen, J. (1979). *Sobre la liberación de la mujer: seminario de Leningrado de 1921*. Barcelona: Fontamara; Kollontái, A. M., y Parrondo, C. (1976). *La mujer nueva y la moral sexual y otros escritos*. México: Casa Juan Pablos.

Para el caso chileno, Julieta Kirkwood Bañados, académica y feminista, entrega una periodización crítica de la realidad del país: entre 1930 y 1950 destaca la incorporación político-ciudadana y las luchas por el voto político; y cuestiona la ritualización de la conducta política femenina en una suerte de formalismo. Entre 1964 y 1970 distingue la ampliación de la participación de las mujeres en la dimensión social, política y oficial caracterizada por una inclusión creciente de las mujeres en los ámbitos laborales e institucionales. Entre 1970 y 1973 – reconoce un periodo de participación política y social de las mujeres durante la Unidad Popular, con privilegio de la política global y sin un énfasis consistente en lo propiamente femenino: el comportamiento femenino está entonces relacionado con la clase social de pertenencia objetiva, de modo tal que existió una escasa respuesta femenina al proceso de cambios, especialmente desde sectores medios y medios-bajos. Por este motivo, Kirkwood plantea la ausencia de un planteamiento y una conexión práctica e ideológica entre los conceptos de hogar y sociedad y la existencia de una mediatización política sacralizada de las mujeres en cuanto a su rol de madres, hijas, compañeras de “los trabajadores”.

Desde 1973, las transformaciones abiertas por la dictadura redefinen los roles de las mujeres, principalmente como agentes esenciales del consumo y como reproductoras y mantenedoras de la fuerza de trabajo². En la posterior lucha por la recuperación de la democracia, la autora reconoce una composición inicialmente de mujeres de sectores medios, provenientes principalmente de militancias de izquierdas. Dichas mujeres asumen una mirada más compleja de las múltiples y las específicas subordinaciones de las mujeres, ligando las luchas de las mujeres con la recuperación y resignificación de la democracia: las consignas “democracia en el país y en la casa” y “si la mujer no está, la democracia no va” son demostrativas del nexo de lo personal y lo político, aporte central del feminismo y que nuevamente enrostran el vínculo explícito entre categorías hegemonícamente diferenciadas.

Lo personal y lo político, tal como lo teórico y lo práctico, ponen en evidencia la indisoluble relación entre la política y los ámbitos colectivos e individuales de nuestras vidas. Con esa complejización muchos límites son sobrepasados y mucha invisibilización se interrumpe: violencia doméstica, feminización de la pobreza, violación conyugal, entre otros problemas, comienzan a ser tematizados. A través de la porfía de las feministas de no dejar fuera de la preocupación social los problemas que el liberalismo entiende como individuales y personales, el feminismo fija una profunda tesis.

Cabe destacar que la alta presencia del activismo feminista durante el correr del siglo XX le significó una importante presencia en la agenda pública y con ello una potente institucionalización mediante la creación de servicios públicos específicos, las organizaciones no gubernamentales especialistas en la temática y las organizaciones internacionales que siguieron el mismo camino.

III. SOBRE DIFICULTADES Y TENSIONES PROPIAS DE LA LUCHA

La producción teórica feminista desde finales del siglo XX aumentó considerablemente, más su convocatoria y movilización enfrentó bajas considerables. En el Chile post Pinochet, durante los noventa se profundizó la descomposición del tejido social y político, en el marco de las transformaciones neoliberales que requerían de la separación entre política y sociedad. El discurso de la gobernabilidad, en base a la política de los acuerdos, por sobre la democracia excluyó de toda esfera decisional a las fuerzas sociales. Legitimando y profundizando la herencia dictatorial en nombre del consenso neoliberal. En el caso particular de la lucha feminista, pierde lo que la caracterizó en su lucha contra la dictadura: la unión de la lucha política por la transformación de la sociedad con la lucha por la emancipación de las mujeres. En ese marco, el desarme político también impacta al movimiento feminista perdiendo su actuar unitario, y capacidad de movilización, instalándose en lo público la tensión entre las “autónomas” e “institucionalizadas”. Dicotomía expresiva del avance de las transformaciones neoliberales mediante la despolitización de la sociedad que expropia las capacidades de la lucha social para disputar los términos centrales de la reproducción de la política. Cuestión que perdura, en menor medida, hasta el día de hoy.

2 Kirkwood, J. (1986). Ser Política en Chile. Las feministas y los partidos. Santiago: FLACSO, pp. 35-36.

Respecto de esta dicotomía Julieta Kirkwood - que no alcanzó a ver la expansión del legado dictatorial en nombre de la democracia - advirtió con gran lucidez: “como primera consecuencia de este “saber” no recuperado respecto del poder, es que las mujeres aceptamos, primero, no luchar nunca por el poder, despreciarlo. Segundo, aceptamos organizar, plantear y producir las luchas por algo: la maternidad en versión de la salud, de los hijos; trabajo para los compañeros, etc., no como una lucha para adquirir, reintegrar-nos, las condiciones reales del ejercicio de esos derechos”³. Con ello enunció la necesidad de recuperar el saber del poder, siendo su no recuperación una de las principales amenazas a la politización feminista, y como consecuencia la posibilidad de convertir al movimiento en una actoría inofensiva para la política y la construcción de los político.

Cabe decir que este nudo, como le llamaría Julieta Kirkwood a las tensiones que cruzan al feminismo, ha estado presente para las feministas hace mucho. Y cómo no estarlo si todas, o al menos buena parte, de las organizaciones militantes partidarias no reconocen el carácter estructural del feminismo y reproducen a nivel organizacional el sistema patriarcal, relegando a las mujeres a su rol histórico y sub representándolas en el total organizacional y, más aún, en las cúpulas de poder. Cabe decir, que la tensión principal se forja con la izquierda, que enarbolando desde hace cientos de años la liberación de la humanidad, ha entendido en gran parte de su historia al feminismo como una lucha accesoría.

En el libro “Ser política en Chile: Las feministas y los partidos”, Kirkwood explicita que la problemática femenina para la política partidaria ha sido casi siempre soslayada, evidenciándose sólo cuando logran imponerse en lucha con los partidos y la sociedad⁴.

Es relevante escarbar respecto de las conexiones entre el feminismo y la izquierda partidaria. Como feministas y militantes de izquierda, estamos convocadas a no evadir la elaboración de la práctica política de la emancipación de las mujeres. Por ello, planteamos como interrogante dicha situación que creemos no resuelta y no pretendemos resolver, sino instalar en el debate de los tiempos que nos cruzan.

IV. DE LAS CONJUGACIONES DE UN CAMINO DE LUCHA PARA LAS FEMINISTAS DE IZQUIERDA

El patriarcado existe antes que el capitalismo y adquiere un modo distinto en el orden capitalista. En el presente, el neoliberalismo genera una especie de refundación del patriarcado. En este proceso, el posmodernismo perturbó a la izquierda alimentando enfrentamientos vacíos y confusos, entre la izquierda de la política de las identidades y la izquierda de la política de la clase. Esa dicotomía ha sido funcional a la dominación, debido a la falsa oposición que supone entre lo económico y lo cultural y a su consideración de la reproducción social al margen de los procesos económicos. Esta división ha fraccionado a los mismos grupos oprimidos, proliferando conflictos intraclase.

En sociedades como las nuestras, organizadas con lógicas neoliberales y heteropatriarcales, es clave relevar que las relaciones de opresión se conjugan y atraviesan en lo económico y cultural: Nuestras vidas están profundamente atravesadas por relaciones de poder, entre mujeres y hombres, debido a una construcción binaria y sexuada de la realidad, lo que se conoce como la división sexual del trabajo, y que norma nuestras identidades, sexualidades y relaciones, lo que permea a la misma diversidad sexual. El rol que se le otorga a las mujeres y a los hombres es distinto, bajo el modelo básico y normativo de familia que replicamos en las diversas esferas de la socialización, a partir del supuesto de que la mujer es la que debe hacerse cargo de una esfera doméstica que se supone distinta de la esfera pública.

Mientras unos se construyen a sí mismos a través del trabajo remunerado, lo público y el poder, otras se construyen mediante la entrega, haciendo y dejando de hacer todo lo necesario para que la vida se mantenga y para que las cosas funcionen. La crianza y el trabajo doméstico, considerados ajenos al mundo del trabajo, allí se insertan. La producción tiene entonces un lado oculto que es la reproducción.

³ Kirkwood, J. (1985). Feministas y políticas. *Nueva sociedad*, 78, 62-70.

⁴ *Op. Cit.*, 2.

El ideal de realización individual por medio de la inserción al mercado del trabajo y al consumo, ha contribuido a generar espejismos de autosuficiencia individual, invisibilizando el trabajo reproductivo y a quienes lo realizan – la incorporación masiva de las mujeres a éste ha sido en términos de precarización, flexibilización, bajos y desiguales sueldos y, con la obligación persistente del trabajo reproductivo; manteniendo en base a dichas características el mandato social de división sexual del trabajo.

De esta manera, la autosuficiencia actual no es más que una gestión que aparenta ser individual y oculta la interdependencia en términos de explotación y la libertad que se prometida. En este orden de ideas, a la categoría de “clase”, que es motor y pilar de transformación, el feminismo la intersecta desde la expresión de diversas relaciones de poder y de opresión. No se trata entonces de sumar luchas, unas al lado de las otras, sino al contrario, poner en relieve dichos cruces en la lucha contra el mismo sistema de dominación. Cabe entonces destacar la causa femenina genuina y un para sí distintivo, en el marco de las luchas contra las múltiples formas que asume el patriarcado, también dentro las fuerzas políticas de izquierda.

V. DE LA AUTONOMÍA Y DEMOCRACIA COMO IDEAS FUNDANTES

El modelo de acumulación del capitalismo neoliberal ha otorgado respuesta a la demanda de igualdad formal en el ámbito del acceso o de las oportunidades. Ha construido un imaginario de inclusión, pero mantiene, al mismo tiempo, profundas relaciones de desigualdad y relaciones que se transan y regulan por la mano invisible. Cuando el feminismo instala la tesis de que lo personal es político, entendiendo lo personal como una construcción social, instala también una nueva conciencia sobre lo que significa ser iguales sin reducciones, con la finalidad de radicalizar la democracia hacia todos los espacios de la vida.

En esa lucha, los movimientos feministas han sido fundamentales para cuestionar los pensamientos homogeneizantes y recalcar las diferentes formas en que las mujeres viven su situación de subordinación en todo ámbito. De esta manera, se ha construido la lucha política por una democracia radical como una tarea necesaria para cuestionar y transformar la variedad de relaciones sociales en nombre de los principios de libertad e igualdad. Con ello, se busca abrir el espacio a las y los iguales diferentes, de quienes hablaba Rosa Luxemburgo, en pos de un orden cuyas promesas modernas no se limiten a la universalización de ser la hegemonía masculina.

El control del Estado y las élites sobre el cuerpo de las mujeres son base fundante del pacto dominante. Esta visión construye socialmente la idea de que reproducirse o no reproducirse es una decisión individual, pero que, dicha decisión, sea cual sea, debe ser controlada, ubicando a las mujeres como objetos de disposición a las decisiones estatales.

VI. EL PRESENTE Y NUESTROS DESAFÍOS

En esta desagregación, las propias derrotas de la izquierda del siglo XX y el avance sin freno de la hegemonía neoliberal, no solo han desorientado nuestra lucha, sino que derechamente nos han expropiado banderas, como la libertad y la democracia⁵. Ello no ha sido indiferente a la lucha feminista, que con dificultad huye de los modelos de producción y reproducción, siendo expropiada de sus banderas, cuya respuesta dominante nos invita precisamente a ver avances de igualdad institucionales en términos neoliberales sin alterar las dominaciones que nos cruzan. Con esa lógica, se niega la crítica radical a las estructuras de dominación, y se olvida que no hay libertad sin igualdad. Por ello, el feminismo que ha sido más interesante es el radical, cuyo legado de lucha nos impone el deber de recuperar el feminismo y radicalizarlo conscientes del momento que atravesamos.

Lamentablemente, a partir de los años noventa las versiones dominantes del feminismo han ido perdiendo la crítica al orden establecido para centrarse en la elaboración de políticas públicas que no alteran ese orden. En esa línea, autoras como Nancy Fraser (2015) han cuestionado la problemática emergencia de un feminismo neoliberal que olvida cualquier otra herencia. Esta coyuntura no es

5 Ruiz, C. (2017). Socialismo y libertad: notas para repensar la izquierda. En Zerán, F. (ed.). *Chile actual: crisis y debate desde las izquierdas*. Santiago: Lom Ediciones, pp. 133-162.

ajena a la post-dictadura chilena, la cual ha ido dando espacio a feminismos que parten asumiendo los limitados marcos de la transición. Fraser afirma que la teoría feminista ha “perdido incluso, sus vínculos históricos con el marxismo, y con la teoría social y la economía política más en general”⁶.

En este punto es muy importante detenernos. Desde la vuelta de la democracia en Chile, las demandas feministas, o cómo se les ha denominado “la agenda de género”, han sido en gran medida incorporadas por los distintos gobiernos de la Concertación. De tal modo, como señala Alejandra Castillo, “las políticas de género se habrían convertido en las grandes aliadas a la hora de demostrar el paso de un orden conservador a uno de signo progresista. ¿Podemos llamar a esto feminismo?”

En nuestro país, el progresismo neoliberal de la Concertación, ha reciclado las demandas por igualdad para ser resignificadas como políticas de “equidad” y “oportunidades”, construyendo el imaginario de que igualdad es lo mismo que meritocracia y que emancipación es el ascenso de una pequeña elite de mujeres, propio de una democracia elitista.

Alejandra Castillo⁷, en esta línea, toma a Verónica Schild indicando “que será el propio ideal de la “autonomía” demandado por los años setenta, el que será asumido por las agendas feministas de los gobiernos latinoamericanos durante los años noventa. Sin embargo, la autonomía será resignificada, ahora en el contexto neoliberal, como “empoderamiento”. El caso ejemplar, para esta autora, es Chile. Sería en nuestro país donde se ha institucionalizado un feminismo, que ha transformando el discurso emancipador en la simple administración de estadísticas para la inclusión social.” Es probable que la institución que mejor refleje esto sea el SERNAM (SERNAMEG en su versión renovada), incapaz siquiera de establecer discursivamente un posicionamiento feminista en recientes coyunturas que han visibilizado en los medios de comunicación de masas, de forma inédita en Chile, la violencia de género en algunas de sus versiones más macabras. De este modo, la institucionalidad que supuestamente habría de defender los derechos de las mujeres termina siendo políticamente impotente a la hora de instalar algo más que políticas públicas y estadísticas neoliberales. Así la vida de la mayoría de las mujeres transita en estadios como: la sexualidad, maternidad, la crianza, el trabajo doméstico, remunerado y precarizado, con una absoluta negación y mercantilización de derechos.

En este contexto histórico, nuestros cuerpos no pueden seguir siendo instrumentos de alguna institución, incluido del mercado. Luchar por el derecho a decidir significa luchar por soberanía y democracia en un sentido irreducible a las instituciones liberales. Es por esto que la reproducción no debe seguir concibiendo como una decisión individual, que atañe al mundo privado, sino que a la sociedad en su conjunto, lo cual requiere la construcción de otro tipo de reparto de libertades y derechos que sacudan una desigualdad naturalizada e invisibilizada. Es ahí donde se debe construir y defender la autonomía, y no como el respeto a un cuerpo “natural” que se considere previo a la construcción social.

El avance sin freno de la alianza patriarcal y neoliberal ha usurpado y privatizado la reproducción misma de la vida cotidiana, nuestros derechos, nuestra voluntad. En base a ello, se torna imperioso construir fronteras claras y visibles entre los subalternos y la dominación que pueda orientar la lucha común, colectiva y mayoritaria que ha protagonizado el último ciclo de movilizaciones en Chile. Es nuestra labor pelear contra la precarización y la desigualdad, construyendo una voluntad para avanzar hacia un nuevo ciclo de luchas emancipatorias: la lucha feminista para un proceso transformador. Es en ese marco, es donde resulta urgente avanzar también hacia la lucha por la desfeminización y desprivatización de los cuidados y lo reproductivo, comprendiendo el carácter social de tales problemas y la necesidad de soluciones públicas a realidades que no son, como se nos quiere hacer creer, privadas.

Entendemos la política feminista como la búsqueda de las metas y aspiraciones feministas dentro de un contexto más amplio de disputa: las promesas de igualdad y libertad en toda la humanidad. Volver y reflexionar y actuar sobre estos temas, una y otra vez, es tarea de toda militancia que busque comprender y combatir todas las formas de dominación en la sociedad en la que, de forma desigual, hoy vivimos. ▼

6 Fraser, N. (2015) *Las fortunas del feminismo. Del capitalismo gestionado por el Estado a la crisis neoliberal*. Madrid, Editorial traficantes de sueños.

7 Castillo, A. (2015, 12 de diciembre). ¿Feminismo Neoliberal? (Parte I y II). *El desconcierto*. Recuperado de <http://www.eldesconcierto.cl/2015/12/22/feminismo-neoliberal-parte-i/>.

Ministerio de las Culturas, las artes y el patrimonio:
**DESCOMPOSICIÓN DEL DEBATE PÚBLICO
VS. FICCIÓN PARTICIPATIVA**

Carolina Olmedo Carrasco



RESUMEN:

El artículo realiza un balance sobre el debate público en torno a la creación del nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sopesando tanto la acción del Estado (vía la actual administración y gestión política del ministro Ernesto Ottone) como la de los distintos agentes que se han involucrado en este proceso, exigiendo el cumplimiento de la promesa abierta por la cartera para una construcción institucional participativa y ciudadana. A modo de puesta en escena de las opiniones adherentes y detractoras, se ofrece una revisión de los aspectos más relevantes del proyecto de ley que crea el nuevo ministerio y el debate público sobre éstos, destacando la contradicción existente entre las acciones/obligaciones estatales enunciadas en la redacción de la ley y la posibilidad concreta de llevar a cabo un programa con dichas características. Para finalizar, se ofrecen algunas perspectivas críticas y políticas que desde la izquierda contribuyan a vislumbrar un horizonte de derecho en materia de cultura.

PALABRAS CLAVE:

- **Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio**
- **Políticas culturales**
- **Derecho a la cultura**
- **Participación ciudadana**
- **Institucionalidad**

I. ¿PARA QUIÉN ES EL NUEVO MINISTERIO?

Tras años de debate y espera, en diciembre de 2015 la promesa de un Ministerio de Cultura para Chile se materializó en la reactivación y reforma por parte del gobierno de Michelle Bachelet del Proyecto de Ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio¹ redactado durante la gestión de Luciano Cruz-Coke, ministro de cultura de Sebastián Piñera². El gobierno de Piñera daba entonces un paso importante dentro del itinerario institucional iniciado por Ricardo Lagos a través de la Comisión Asesora de Cultura (“Comisión Garretón”) y el posterior Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), que independizaba al quehacer cultural del resto de las tareas del Ministerio de Educación (MINEDUC), y responsabilizaba directamente a la presidencia por la construcción de un proyecto cultural para el país. Ello se materializó en un importante financiamiento durante el propio gobierno de Lagos, así como durante el primer mandato de Bachelet³.

La continuidad y colaboración entre los intereses de ambos bloques políticos en este asunto no es casual, y sería ratificada más tarde en el paso del proyecto para el nuevo ministerio por la Cámara de Diputados, donde fue aprobado casi unánimemente por 109 votos a favor y una abstención⁴. Para algunos, ello sería la prueba de que todo el espectro de la política formal -desde organizaciones emergentes a las grandes coaliciones⁵- se vería beneficiado con su impulso. Cada vez más cercano en aspecto y funciones a un órgano de propaganda, el nuevo ministerio anuncia desde su génesis -a través de ejercicios públicos parafernáticos- la “buena nueva” de la participación ciudadana, ello con el fin de distinguirse de otros ministerios por medio de una identidad personal y cercana. En este sentido, tanto el proyecto de ley como las acciones del CNCA en torno a él no hacen sino confundir la idea de justicia social con la exhibición de diversos anclajes que expresarían a aquellos espacios sociales a los que se busca convocar.

A contrapelo de un anuncio de transformación social que no consigue establecer un itinerario institucional concreto en torno al derecho y acceso universales a la cultura, se suma un constante (impotente) ejercicio de “transmisión verbal” de “poder” a la ciudadanía, que es convocada a encuentros que se presentan como “vinculantes” aunque no cuenten con un objetivo claro o efecto comprobable. Ejemplo de ello son los Encuentros Regionales para la creación de la Política de Artes de la Visualidad⁶ (que hasta ahora han sido realizados sólo en cinco de las quince regiones del país⁷), y la propia Red Cultura: una plataforma virtual dependiente del CNCA que busca promover una amplia participación en cultura, y que sin embargo -en su apariencia de monólogo institucional- parece ser más una bolsa de trabajo organizada y financiada por el Estado que un espacio de expresión ciudadana.

Como estos, diversos eventos consultivos han sido criticados tanto por su baja asistencia como por no convocar a aquellos agentes “mínimos” para impulsar cualquier cambio en las instituciones culturales existentes. Así, a la imagen cada vez más consolidada de un ministro que se comunica con los actores del medio principalmente a través de la prensa⁸, la inasistencia a los encuentros convocados por el CNCA de los “altos cargos”, y la fragmentación actual de los propios equipos institucionales de cara a

1 CNCA (2015). Presidenta Bachelet firma indicación sustitutiva al Proyecto de Ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio <http://www.cultura.gob.cl/eventos-actividades/presidenta-bachelet-firma-indicacion-sustitutiva-al-proyecto-de-ley-que-crea-el-ministerio-de-las-culturas-las-artes-y-el-patrimonio/>

2 Alarcón, R. (2013, 8 de junio). ¿Qué es lo que deja Luciano Cruz-Coke al mundo de la cultura?. *Radio UChile*. Recuperado de: <http://radio.uchile.cl/2013/06/08/que-es-lo-que-deja-luciano-cruz-coke-al-mundo-de-la-cultura/>

3 De este periodo son las megainversiones de la Trienal de Chile (2009) y la reconstrucción del Centro Cultural Gabriela Mistral, así como múltiples instancias privadas con financiamiento estatal por vía de diversos programas de estímulo.

4 CNCA (2016). Cámara de Diputados despacha al Senado el Proyecto de Ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Recuperado de: <http://www.cultura.gob.cl/eventos-actividades/camara-de-diputados-despacha-al-senado-el-proyecto-de-ley-que-crea-el-ministerio-de-las-culturas-las-artes-y-el-patrimonio>

5 Recordemos la heterogénea comisión de cultura de la cámara de diputados, principal órgano de sanción del nuevo ministerio en la cámara baja. cf. https://www.camara.cl/trabajamos/comision_portada.aspx?prmlD=496

6 Sobre estos encuentros, Varinia Brodsky del área de artes visuales del CNCA afirma “Hemos podido constatar que la comunidad requiere de canales de diálogo permanente y construcción conjunta, trabajar sobre esa base es nuestro espíritu”. cf. <http://www.cultura.gob.cl/actualidad/comunidad-artistica-participa-en-encuentros-regionales-para-la-creacion-de-la-politica-de-artes-de-la-visualidad-2017-2022>

7 Regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Biobío y Antofagasta.

8 Villasmil, A. y Parra, D. (2016, 9 de junio). Ernesto Ottone sobre institucionalidad en artes visuales y los planes para Cerrillos”. *Artishock*. Recuperado de: <http://artishockrevista.com/2016/06/09/ernesto-ottone-institucionalidad-artesvisuales-los-planes-cerrillos/>

lo público -visible en las demandas del movimiento No sin la DIBAM⁹ desde 2015- dan cuenta de cómo los entusiastas balances sobre la “participación ciudadana” en dicha cartera están lejos de ser reales en un proceso que ni siquiera asegura la participación de sus propios trabajadores.

La notoria ausencia de directores de bibliotecas y museos a las instancias de trabajo del CNCA fue una preocupación para aquellos agentes que -convocados por segunda o tercera vez- ya habían manifestado en diversas instancias sus dudas y aprehensiones sin que estas lograran trascender la barrera de la mera opinión en un focus group. Lejos de guardar silencio, varios directores de museos de arte utilizaron a la prensa como un medio para “lavarse las manos” respecto del proceso: rebelarse públicamente contra el gobierno en el momento más agudo de su crisis de legitimidad, sin cuestionar siquiera la responsabilidad que cabe a sus propios cargos de dirección. En este sentido, sus declaraciones muestran el alto grado de descomposición de los lazos entre el gobierno y dichas instituciones, haciendo inverosímil concebir como instancias de transformación real a reuniones que no aseguran un mínimo de vinculación entre lo expresado por la ciudadanía en ellas y la elaboración de políticas culturales estatales¹⁰.

Y es que pese a estar colmados de un lenguaje democratizante, la sistemática exclusión de aportes técnicos realizados por especialistas en dichos encuentros, así como la ausencia en los encuentros públicos de representantes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) y del Consejo de Monumentos Nacionales, dan cuenta de cómo -a pesar del encuentro público- las decisiones que importan continúan siendo tomadas a puertas cerradas. Sin desconocer el valor de su importante convocatoria pública, no es una realidad en el actual CNCA (ni en el futuro ministerio) que dicha participación y las ideas ahí expresadas sean consideradas a futuro.

Esta constatación perpetúa una separación de facto -intencionada o no- entre la acción participativa y la institucional, legitimando la clásica lectura de que la ciudadanía no es más que una receptora de dichas políticas o una reproductora pasiva de las mismas, necesitando guía y representación a la hora de construir un proyecto cultural nacional. El tránsito al nuevo ministerio resulta particularmente ilustrativo en este sentido, pues en lugar de configurar una institución de acuerdo a las necesidades diagnosticadas por la administración vigente (la DIBAM y su constante crisis económica), el gesto parece ser el de amplificar, extender y aumentar el modelo de repartición instaurado durante el gobierno de Lagos¹¹ y consolidado en los dos mandatos de Bachelet, que concibe la instalación de industrias culturales por medio de subvenciones temporales a la ocupación en cultura. Es visible entonces que detrás del eje participación / no participación se esconde un profundo conflicto en torno a los empleos y perspectivas de financiamiento que devienen de la subvención estatal, así como en torno a la persistente dependencia del CNCA respecto de la presidencia de turno.

II. LA POLÍTICA CULTURAL COMO FICCIÓN DEMOCRÁTICA

Como política pública, los grandes “megaproyectos” en cultura -infraestructura cultural del primer mundo hecha al alero de un inexistente Estado del bienestar¹²- se transformaron durante los últimos años en una suerte de espacio para la “ficción ciudadana”: en su realización cosmética del ideal de desarrollo y la gentrificación de entornos, la infraestructura cultural emerge como un ítem vistoso para los ciudadanos dentro de las ofertas de programas electorales. En particular desde la apuesta de la Concertación / Nueva Mayoría se materializa el sentido, función y misión de la política formal de un bloque gobernante, relegando frecuentemente el vínculo entre Estado y cultura a aspectos propios de la comunicación y propaganda políticas.

9 Entidad que agrupó tanto a la AnfuDIBAM como a trabajadores externos dependientes en distinto grado de la DIBAM (contratación a honorarios).

10 Berger, D. et al (2016). Preocupación, inquietud e incertidumbre: lo que dejó el primer encuentro para un diseño de las políticas de las artes visuales. *El Mostrador*. Recuperado de: <http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/12/07/preocupacion-inquietud-e-incertidumbre-lo-que-dejo-el-primer-encuentro-para-un-diseño-de-las-políticas-de-las-artes-visuales/>

11 Lizama, M. y M. Montes (2014). Chile quiere un ministerio de cultura. *Portal Facultad de Artes UChile*. cf. Recuperado de: <http://www.artes.uchile.cl/noticias/100924/chile-quiere-un-ministerio-de-cultura>

12 Matucana 100, Centro Cultural Palacio La Moneda, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Centro Cultural Gabriela Mistral, Parque Cultural Valparaíso y el Museo Violeta Parra.

Yendo al proceso mismo de creación del nuevo ministerio, una de las críticas más fuertes realizadas a nivel público -imbricada en una crítica más amplia a la gestión administrativa, comunicacional y política del ministro Ottone- es precisamente el signo contradictorio de los sujetos a los que enuncia, reconoce y convoca. El nuevo ministerio se impone la labor de “contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales” (p.3)¹³ como una tarea posible de llevar a cabo dentro del marco de colaboración directa con el Presidente, y concibiendo a la cultura en primer lugar como un ámbito de acción del Estado al interior de la sociedad (p.3-4). Así, a la vez que la ley expresa la obligación y deseo de aproximar a la ciudadanía a un proyecto cultural del país (ya sea en calidad de objeto de sus políticas como portadora de ideas para su construcción), inmediatamente afirma que dicha ciudadanía estará conformada por sus propias instituciones, a quienes identifica claramente (ver cuadro 1).

Más allá de lo cuestionable que resulta el ejercicio de “objetivar” desde esta estrecha idea de cultura a identidades que se presentan ambiguas y móviles en sus contextos específicos (migración, afrodescendencia, chilenos, indígenas, mujeres), es necesario advertir la nocividad de misma de “objetivación” o “institucionalización” de identidades ofrecida como modelo por el actual proyecto de ley. En esta idea se afirma la redacción de obligaciones y tareas para el nuevo ministerio que escasamente son posibles de realizar, sancionar u objetivar. Asimismo, y ante la promesa de obtener voz y voto dentro de las instancias participativas “parlamentarizadas”, estimula la aparición de comunidades formales (con presencia de personalidades jurídicas), concebidas como el espacio de desarrollo y reconocimiento por parte del Estado de las diversas comunidades, identidades y creadores.

Ante ello, ¿cómo puede una instancia ministerial reconocer objetivamente -con el fin de evaluar y valorar, al nivel que exige la ley- a las diversas culturas y pueblos indígenas? En torno al pueblo mapuche como uno de los puntos más álgidos del debate, pues qué validez tendría la promesa de protección cultural de un Estado que desconoce la autonomía política y derechos humanos de parte importante de quienes se reconocen étnica y culturalmente en dicho pueblo. Hasta hoy, la ley no exhibe metodologías claras de reconocimiento de dichas “culturas diversas” o de su etnogénesis, ni tampoco argumentos para la separación de los “elementos culturales” respecto de aquellos que -como en el caso mapuche- son expresión puramente social o política.

Para algunos¹⁴, esta inclusión y reconocimiento de los 9 pueblos originarios por parte del Estado a través del CNCA¹⁵, obliterando en la exaltación de lo “cultural” sus dimensiones políticas e intelectuales, no sería sino la voluntad manifiesta del nuevo ministerio por “reducir” y “regionalizar” a las comunidades según su capacidad de negociación formal con el Estado. Una suerte de “cercamiento cultural”, en tanto construcción ficcional de dichas identidades a partir de elementos fijos (tecnocráticos y capitalistas), que privilegia la acción y la voz de aquellos grupos más “integrados” por sobre el resto.

A ello apuntó una carta de rechazo a la gestión de Ernesto Ottone en materia de artes visuales comentada recientemente¹⁶, que destacó las evidentes deficiencias técnicas de la propuesta ministerial (acusando principalmente la ausencia de una ley de patrimonio que proteja a las diversas colecciones estatales), así como también al proyecto cultural mismo ofrecido por la Nueva Mayoría al país, recalcando su construcción de instituciones a espaldas los propios productores de la cultura.

13 Proyecto de Ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (2016), documento en PDF <http://www.cultura.gob.cl/proyecto-ley-ministerio/> Debido a la recurrente referencia a este documento a lo largo del escrito, de aquí en adelante se indicará sólo el número de página al cual pertenece la cita o el contenido en cuestión entre paréntesis, al interior del texto.

14 Destacan Pablo Chiuminatto y Justo Pastor Mellado, cf. <http://www.radiozero.cl/podcasts/pablo-chiuminatto-cerrillos-aparecio-del-sombrero-del-mago-el-21-de-mayo/>

15 Barattini, C. (2016). Ministerio de Cultura [cartas al editor de *El Mercurio*]. Recuperado de: https://scontent.fsc11-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12923101_502600749947053_7234365264428016382_n.jpg?oh=cb528fba0ce66990ef474a295aaba88a&oe=5970C755

16 Rechazo a la gestión del ministro Ottone enviada al CNCA en noviembre de 2016, junto a la firma de 160 profesionales, representantes del sector de las artes visuales, institucional e independiente, que comprendió a creadores, gestores, investigadores y docentes de las regiones de Arica y Parícuta, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. También incluyó a firmantes chilenos residentes en el extranjero.

Del mismo modo, constataba negativamente la dependencia entre el proyecto cultural del país y la presidencia: a fin de cuentas, entre la necesidad de realizar una cultura en común y la cada vez más necesaria propaganda gubernamental. De este modo, la cultura como “ficción democrática” y repartición focalizada de fondos buscaría paliar -por medio de imposturas, representaciones y puestas en escena públicas- la actual crisis de legitimidad del gobierno expresada en diversos sectores sociales.

Ante esta particular función pública, instancias como el Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio -órgano mixto (gubernamental y ciudadano) encargado de confeccionar las políticas culturales quinquenales a nivel nacional (p.18-19)-, se muestran como verdaderas realizaciones de una “comunidad imaginada” de integración cultural y social; que sin embargo en su ejercicio tensionan a las diferentes comunidades en la imposición de un modelo específico: el levantamiento de “candidaturas” respaldadas por organizaciones formales (legales), deviniendo en un horizonte específico de reconocimiento de la cultura por la vía de su inclusión en una forma institucional concreta.

Este punto se ve reforzado por el compromiso adquirido por el nuevo ministerio de realizar anualmente la Convención Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: “una instancia para recibir a las personas e instituciones de la sociedad civil, observaciones y propuestas sobre la marcha institucional, siendo de responsabilidad del Ministerio su organización y realización” (p.24). Según los parámetros de conformación del Consejo, dicho evento reconocerá y legitimará públicamente a quienes expresen los intereses de las distintas comunidades, propiciando una participación colectiva a partir de personalidades jurídicas cuyo peso se mediría en una arena de competencia que dista del valor cultural de dichos espacios e iniciativas. Junto con esto, el modelo propuesto tiende a tensionar internamente a las comunidades convocadas, en la medida que quienes integran la mesa serán “representativas de los respectivos sectores o actividades... [y] no tendrán el carácter de representantes de quienes los designaron o propusieron” (p.19). Es explícita aquí la naturalización de un “interés común” que articula a esta “comunidad imaginada” (que guiaría a sus representantes sobre sus diferencias), sin considerar el hecho de que la desvinculación entre la mesa y los intereses directos de las comunidades hacen impensable su sustentabilidad en el tiempo como “espacio representativo”. Asistimos así, sin más, a una propuesta de disolución de la separación entre política y trabajo en el ámbito cultural, donde las comunidades se transforman -en mayor o menor medida- en el electorado de sus representantes, quienes a su vez deciden las condiciones de empleabilidad¹⁷.

Más allá de estas desalentadoras “transformaciones”, el resto del proyecto abunda en gestos publicitarios que buscan legitimar la acción estatal en cultura. Ante la carencia de contenidos tras las comunidades contempladas, la redacción de la ley exhibe más bien el deseo de un horizonte social de integración, y no los elementos necesarios para -por vía de un proyecto cultural a nivel país- contribuir a la integración y expresión real de dichos sujetos en el ámbito cultural. Lejos de ocuparse de estos temas propios del área, la ley cuida bien de especificar cómo las secretarías regionales ministeriales deberán “prestar asesoría técnica al intendente” en temas no especificados (p.16-17), o como deberán colaborar con “los municipios de la región, las corporaciones municipales y las organizaciones sociales cuyo objeto principal sea cultural” (p.17), entre otras cosas.

III. SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO < SUBSECRETARÍA DE ARTES

Si bien sabemos por vía del propio ministro Ottone que varias de las futuras medidas del ministerio concernirán a colecciones y proyectos hasta ahora administrados por la DIBAM¹⁸, existen evidentes descoordinaciones entre ambas entidades, así como una marcada exclusión de los trabajadores de museos y bibliotecas de los espacios de opinión y decisión. Este punto resulta de particular interés, pues

17 El nuevo consejo decidirá los principales instrumentos de traspaso de capitales desde el Estado a sus productores: la aprobación de las políticas culturales quinquenales, la propuesta de jurados relevantes para los fondos de cultura/patrimonio, y la propuesta de bienes muebles para la adquisición estatal (24).

18 Durante las negociaciones entre el Estado y las organizaciones de funcionarios, en un contexto de reducción del aparato estatal, el ministro declaró que el Centro Nacional de Arte Contemporáneo sería “un laboratorio vivo para crear una Política Nacional de Artes Visuales” duplicando instituciones ya existentes.

el cuerpo de funcionarios del nuevo ministerio surgiría de la fusión entre el CNCA y la DIBAM, que se transformarían en la Subsecretaría de Arte y la Subsecretaría de Patrimonio y Cultura, respectivamente. Lo insólito es que si bien estas instituciones concentran un número importante de los especialistas locales en cultura, patrimonio y gestión cultural, y que además deben implementar y ejecutar las políticas quinquenales definidas, sus organizaciones de trabajadores apenas tienen la representación de un integrante entre los 21 con que contará el nuevo Consejo (cuadro 1), y este único representante además deberá circunscribirse al ámbito específico de la gestión pública (p.21).

Fue el planteamiento de esta estructura el que encendió las alarmas de la Asociación de Funcionarios de la DIBAM (AnfuDIBAM), que se movilizó entre 2015 y 2016 a fin de presionar públicamente por un itinerario conjunto (de trabajadores y dirigencias) en la construcción ministerial entre la antigua y la nueva institucionalidad. Sus demandas apuntaban a la constatación de una inclusión “reducida” de la DIBAM en el nuevo ministerio: la Subsecretaría de Patrimonio y Cultura, instancia subalterna respecto de su contraparte -la Subsecretaría de Artes-, y limitada únicamente a los aspectos tocantes al patrimonio. Así, mientras gran parte del actual CNCA tendrá a su cargo “la dirección administrativa de las Secretarías Regionales Ministeriales y la administración y servicio interno del Ministerio” (p.12) -y será el motor de funcionamiento de la entidad-, la DIBAM verá reducido enormemente su ámbito de incumbencia. Junto con instalarse una problemática idea de patrimonio vinculado al meramente al pasado, reducida a “las materias relativas al folclor, culturas tradicionales, culturas y patrimonio indígena, patrimonio cultural material e inmaterial e infraestructura patrimonial, como asimismo, la participación ciudadana en los procesos de memoria colectiva” (p.15), también se pone en cuestión la integridad de los actuales puestos de trabajo de la DIBAM en el proceso de transición al nuevo ministerio. Entre varias otras, las menos resguardadas serían las colecciones de artes visuales antiguas y modernas alojadas en el Museo Nacional de Bellas Artes y los museos regionales¹⁹, así como el propio conjunto de los archivos y colecciones que funcionan en la red DIBAM y sus respectivos trabajadores²⁰.

En este escenario de incomunicación, No sin la DIBAM depuso el paro únicamente tras la firma de un acuerdo conjunto entre el ministro y los funcionarios donde se comprometió la realización de indicaciones al proyecto de ley que reconocieran debidamente a la DIBAM, así como también determinar -en relación a ello- su rol preponderante en el proceso de conformación del ministerio. La reciente apertura del Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Cerrillos y su declaración de ser el nuevo “laboratorio vivo para crear una Política Nacional de Artes Visuales” por sobre las instituciones ya existentes parece ser el abandono de dicho compromiso. La punta de flecha de una política de dispersión y duplicación de entidades, así como el reflejo de un proceso institucional incapaz de sostener cualquier acuerdo adquirido con sus propios trabajadores²¹. Actualmente ahogada en un escándalo de corrupción²², la AnfuDIBAM deberá conformarse con los escasos amarres obtenidos en la ley, y su única representación concreta: una silla en el nuevo Consejo, que deberá ser compartida con el total de los funcionarios ministeriales.

En este sentido, el protagonismo de una Subsecretaría de las Artes que no ha exhibido políticas específicas para su área de experticia en el debate público sobre la nueva cartera²³, así como el amarre y reducción burocrática de la DIBAM a la nueva Subsecretaría de Patrimonio y Cultura, serían el momento inicial de un modelo de tercerización / privatización de las capacidades técnicas necesarias para el funcionamiento de cualquier ministerio de cultura, y que hasta ahora habían sido construidas, conservadas y apropiadas por el Estado a través de la relegada DIBAM.

19 Las colecciones de arte contemporáneo estarían administradas en dicha orgánica directamente por la Subsecretaría de las Artes a través del Centro Nacional de Arte de Cerrillos, que inicia sus colecciones en 1967.

20 Un ejemplo de ello es Memoria Chilena <http://www.memoriachilena.cl>

21 Hormazabal, M. (2016). Institucionalidad cultural [cartas al editor de El Mercurio]. Recuperado de: https://scontent.fsc11-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12923101_502600749947053_7234365264428016382_n.jpg?oh=cb528fba0ce66990ef474a295aaba88a&oe=5970C755

22 El Mostrador (2016). Indignación en funcionarios de la DIBAM tras conocerse que platas de su organización gremial fueron gastadas en casinos de juego. *El Mostrador*. Recuperado de: <http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2016/12/14/indignacion-en-funcionarios-de-la-dibam-tras-conocerse-que-platas-de-su-organizacion-gremial-fueron-gastadas-en-casinos-de-juego/>; y Hormazabal, M. (2016, 27 de diciembre). Aclaración: desfalco en la AnfuDIBAM. *El Mostrador*. Recuperado de: <http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/12/27/aclaracion-desfalco-en-la-anfudibam/>

23 Op. Cit., 10.

IV. ¿QUÉ IMPLICA EL REAL EJERCICIO DEL DERECHO A LA CULTURA?

A grandes rasgos, la cultura es definible como aquellos códigos de significación compartidos que dan identidad a un grupo humano, que le permiten comunicarse, interactuar, apreciar y predecir las conductas de otros al interior de dicha colectividad²⁴. Lejos de vincularse a meros fines recreativos o arbitrarios -como serían en este caso la calidad técnica, viabilidad económica y cantidad de espectadores/asistentes-, una política cultural debe promover el derecho universal a la cultura tanto en el acceso como en la construcción de dicho espacio intersubjetivo a nivel creativo y del disfrute.

Frente a este horizonte, asumiendo aún la necesidad de la cultura como motor de integración y modernización, una posición consistente no puede sino partir de la base de consolidar y exceder su estado actual. Su democratización implica necesariamente el abandono de las prácticas arbitrarias y cerradas al debate público que hasta ahora han caracterizado al gobierno a pesar de su discurso ciudadanista. En este sentido, democratizar la cultura en un país desigual como Chile necesariamente pasa por pensar la participación ciudadana como un proyecto a realizar, asumiendo activamente la preparación de las condiciones de base que lo posibiliten, y no como un horizonte banalizable de acuerdo a necesidades electorales contingentes. En este sentido, la emergencia del “diálogo abierto” como una pantomima respecto del avance institucional a punta de “diálogos cerrados” no es más que la constatación de la inexistencia de un debate real, exponiéndonos como escenas no a un “foro abierto”, sino a la observación de su colapso y descomposición.

El carácter subsidiario de la nueva institucionalidad continúa sin resolver el problema de su antecesora, cuyas políticas de repartición naturalizaron la competencia entre “emprendedores en cultura” sobre la base de una necesaria desigualdad. De este modo, es urgente criticar el modo liviano en que se ha abordado el fomento de la relación capitalista sobre las demás en este ámbito: encarar el hecho de que su imposición propicia la extinción del resto de los modos de organización y producción cultural. Es a través de este prisma que debe criticarse la precarización laboral en cultura (que atenta principalmente contra las áreas de educación, mediación e investigación), y el dominio de las formas de la gestión cultural por sobre todas las demás a la hora de elaborar proyectos culturales.

Uno de los sesgos más persistentes en el ámbito de la cultura y el patrimonio es el de género, que aún en una institucionalidad progresista existe transversalmente: sin duda en los empleos y cargos de dirección, pero también en las políticas de adquisición y premiación de creadoras y creadores, en los vínculos regulares dichos sujetos, y en las representaciones de ambos géneros dentro del relato patrimonial e histórico. En este contexto, y pese a su persistencia histórica en las luchas feministas, las cuotas de género deben concebirse no como un fin en sí mismo -el ejercicio efectivo de la paridad en trabajos de dirección-, sino como una metodología de construcción cultural. Así, las cuotas deben concebirse en la promoción de una cultura que integre a las distintas identidades sociales en conflicto: de ahí la relevancia de su aplicación no sólo dentro de los equipos de dirección o administración, sino que en la diversidad de empleos que coexisten en una institución de cultura, y que pueden (y deben) ser ofrecidos como un modelo claro de modernización de una sociedad patriarcal.

Como parte de una necesaria postura sobre la participación de agentes culturales privados en un proyecto cultural amplio, así como también respecto de las relaciones internacionales de nuestras producciones culturales, el Estado debe adoptar una posición activa frente a la privatización del patrimonio, impulsando normativas estrictas e impuestos fijos a la exportación y traspaso de piezas, y fortaleciendo los proyectos de adquisición y conservación de las colecciones alojadas en sus instituciones. Del mismo modo, debe apoyar y exigir la mantención de colecciones de interés público alojadas en espacios privados que den acceso a ellas, como parte de una política que comprometa la adquisición-liberación de dicho patrimonio con respaldo estatal. En resumen, encarar la elaboración de una ley de patrimonio sólida que permita realizar materialmente la descentralización y recuperación de nuestras expresiones artísticas y patrimoniales. De eso ya se ha hablado bastante en las instancias participativas del CNCA²⁵ sin obtener hasta ahora una respuesta gubernamental.

24 Margulis, M. (2014). *Intervenir en la cultura: más allá de las políticas culturales*. Buenos Aires: Biblos.

25 Op. Cit., 10.

Atendiendo a la necesidad de responder al vacío de sentido en la institucionalidad existente -colonizada por las necesidades del bloque de gobierno-, resulta urgente reformular la pregunta por los medios de construcción de una “cultura en común” desde y más allá del Estado, a partir de una posición de izquierda anticapitalista. Desde esta perspectiva, democratizar la cultura no puede sino sostener un horizonte radical de derecho, promoviendo la autonomía cultural de los sujetos y organizaciones a los que engloba respecto de los intereses del Estado. Sostener este mínimo significa oponerse a un proyecto de ministerio que busca solucionar a modo de manual la heterogeneidad propia de una realidad en crisis.

Así, es necesario también erigir una postura frente a la participación de la economía en el ámbito cultural a nivel nacional como internacional. Como premisa mínima, es necesario asumir firmemente la excepción cultural a nivel de Estado frente a las negociaciones en tratados de libre comercio que impacten directa o secundariamente la producción, acceso y consumo cultural, así como también asumir responsablemente la protección del patrimonio y cumplimiento de las normativas y programas trazados para ello. Desde la economía “fronteras adentro”, es necesario cuestionar la noción de industrias culturales promovida por los últimos cuatro gobiernos, cuya tendencia “industrial” ha sido la producción seriada de pequeños emprendimientos estacionales. Repensar el derecho a la cultura implica poner a revisión el fomento industrial de la cultura y el arte, y su posibilidad de realización en un país donde el consumo cultural es acotado, reducido, y sus mercados altamente dependientes del Estado. Más aún, implica plantearse la tarea de reconstruir un tejido social de empleo en cultura que se oponga a la adopción irreflexiva de las formas del mercado como única vía de integración intersectorial. En este sentido, resulta imposible compatibilizar un ministerio que vele por un proyecto cultural con uno que reconozca como voz legítima sólo a los productores culturales representados por organizaciones legales.

Otros aspectos importantes de atender son aquellos que aseguran un acceso cada vez más amplio a las diversas producciones culturales existentes, que permitan construir de manera sólida la base de la autonomía cultural a la que se aspira. En Chile, la que emerge por su insostenible arbitrariedad es la necesidad de eliminar cualquier impuesto al disfrute, la producción, la educación y la comunicación de la cultura, sin importar sus diversas condiciones de masividad y/o popularidad. Es de similar importancia proyectar el derecho a la cultura en medios digitales, asegurando el acceso abierto a toda fuente y producción cultural realizada en el país. Dicho acceso no sólo debe concebirse desde lo educativo (hoy única “tregua” con el capital) sino que defender su carácter libre o “de ocio”, fomentando “la cultura del tiempo libre” como parte fundamental de un derecho radical a la cultura.

La realización de estas y otras acciones al interior de cualquier proyecto cultural planteado desde la democratización y el derecho implica asumir la superación del anuncio de “integración de las poblaciones y las culturas”, concibiendo este aspecto como uno de los motores posibles para la reconstrucción de aquellas comunidades tachadas como “apáticas”. Cualquier proyecto que busque una apertura cultural real para las poblaciones debe anteponer a sus necesidades contingentes la tarea de encarar el desafío de su necesaria formación y modernización. Como ya hemos señalado, el desafío del Estado chileno en materia de cultura debe necesariamente superar el su situación actual -un carácter subsidiario y neoliberal que se traduce en ayudas económicas a quienes no sobreviven de un mercado inexistente-, fortaleciendo y protegiendo a nuestra producción cultural de las lógicas mercantiles y su horizonte “industrializante”, y asegurando un campo cultural en el que su presencia no sea la única, e incluso a futuro tampoco sea la más importante²⁶. ▼

26 Fielbaum, A. y Olmedo, C. (2015, agosto). Más allá del subsidio y la “diversidad”: apuntes para una política de la cultura de carácter público. *Cuadernos de Coyuntura*, (9), pp. 28-38.

Cuadro 1 – Conformación del Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio

N° repr.	Sector	Requisitos
4	Ministerios de Estado	Ministro de Cultura, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Educación, Ministro de Economía, Fomento y Turismo, o sus representantes.
4	Representantes de las artes	Reconocida vinculación y una destacada trayectoria en distintas actividades vinculadas al quehacer de la creación artística, industrias culturales, educación artística, artes visuales, artes escénicas, literatura, música, artes audiovisuales, diseño, arquitectura y gestión cultural, designadas por el Ministro a propuesta de las organizaciones que agrupan a artistas, cultores y gestores, que posean personalidad jurídica vigente. Al menos dos de estos integrantes deberán provenir de una región distinta a la región Metropolitana.
3	Representantes de las culturas tradicionales y el patrimonio cultural	Reconocida vinculación y una destacada trayectoria en estos ámbitos, como cultores, investigadores, especialistas y gestores culturales, designadas por el Ministro a propuesta de las organizaciones patrimoniales del país, que posean personalidad jurídica vigente. Al menos dos de estos integrantes deberán provenir de una región distinta a la Metropolitana.
1	Representante de las culturas populares o culturas comunitarias	Reconocida vinculación y una destacada trayectoria en estos ámbitos, como creador, cultor, investigador, especialista y gestor cultural, designada por el Ministro a propuesta de las organizaciones culturales del país que posean personalidad jurídica vigente.
2	Representantes de los pueblos indígenas (9 reconocidos)	Destacada trayectoria en los ámbitos de las artes, las culturas o del patrimonio, designados por el Ministro a propuesta de asociaciones y comunidades indígenas constituidas según la legislación vigente.
2	Académicos vinculados a los ámbitos de las artes y el patrimonio	Designados por las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado y acreditadas por un período de a lo menos cuatro años. Al menos uno de ellos deberá ser de una región distinta de la Metropolitana.
1	Representante de las comunidades de inmigrantes residentes en el país	Destacada trayectoria en los ámbitos de las artes, las culturas o el patrimonio, designado por el Ministro a propuesta de las entidades que los agrupen, que posean personalidad jurídica vigente.
1	Galardonado con el Premio Nacional	Elegido por quienes hayan recibido esa distinción.
2	Representantes de organizaciones ciudadanas cuyos objetos sociales estén relacionados directamente con el ámbito de la cultura o el patrimonio cultural	Personalidad jurídica vigente, representantes elegidos por dichas organizaciones. Uno de estos integrantes deberá provenir de una región distinta de la Metropolitana.
1	Profesional en gestión cultural	Destacada experiencia en gestión cultural pública, designado por el Ministro, a propuesta, de común acuerdo, por la o las asociaciones nacionales de funcionarios del Ministerio y la o las asociaciones nacionales de funcionarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural... Los representantes de los Ministros, en cualquier caso, serán funcionarios de dichos Ministerios.

Sector pesquero chileno: **CONCENTRACIÓN, DESARTICULACIÓN SOCIAL Y CRISIS ECOLÓGICA**

Rodrigo Oliva • Sebastián Caviedes



RESUMEN:

Se indaga en la acabada colonización empresarial que experimenta el sector pesquero chileno, a través del análisis de los actores y conflictos que lo estructuran. Como consecuencia, se distinguen tres procesos paralelos que están a la base de este fenómeno: la concentración económica del sector, la desarticulación del movimiento social de pescadores artesanales y la crisis que afecta la sustentabilidad del recurso marino. Se concluye que el agotamiento acelerado de éste obliga al gran capital pesquero, para mantener sus niveles de acumulación, a forzar un reordenamiento privatizador encarnado en la Ley de Pesca.

PALABRAS CLAVE:

- Sector pesquero
- Movimiento social
- Concentración económica
- Desarticulación social
- Crisis ecológica

Hace unas semanas, a solicitud de los fiscales a cargo de la investigación sobre las pesqueras de la Asociación de Industriales Pesqueros de la región del Biobío (Asipes), arista del caso Corpesca, el Servel entregó un listado en que identifica a seis de estas empresas entregando aportes reservados legales por más de \$300 millones a campañas electorales, repartidos entre candidatos de cinco partidos políticos (UDI, RN, PS, DC y PPD) y un independiente. Destacan en ese listado Sebastián Piñera, Evelyn Matthei, Jacqueline van Rysselberghe y el ex subsecretario de Pesca, Raúl Súnico¹, este último que debió renunciar a su cargo tras conocerse sus tratativas con el gremio, que incluyeron favorecer a la industria en la tramitación de normas que regulan al sector -incluso a contrapelo del programa de gobierno- y cobros hechos por su esposa a través de boletas falsas, justamente el mecanismo por el que el Ministerio Público sospecha que Asipes entregó aportes ilícitos a actividades políticas².

La sombra de este financiamiento, además, ha alcanzado a pymes y dirigentes de la pesca artesanal de la VIII región³, acusados de recibir aportes tanto para fortalecer sus organizaciones como para financiar las campañas parlamentarias de representantes de la pesca artesanal. Ello, teniendo a mano el antecedente de la caída de Iván Fuentes, pescador pesquero que lideró el Movimiento Social de Aysén en 2012, y que recibió aportes de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), siendo ya diputado electo⁴.

Como viene ocurriendo desde que se conocen antecedentes de la tramitación del proyecto de Ley de Pesca del año 2012, la relación entre dinero y política se ha tomado la agenda del sector y la discusión pública sobre el futuro de la pesca en Chile. Y, si bien la ilegitimidad de ésta ha abierto un escenario de conflicto que ha transparentado los intereses de los actores de la industria, el impacto provocado por tales informaciones ha tendido a oscurecer el entendimiento cabal del proceso por el cual se ha llegado hasta este punto, en el que se erige una acabada experiencia de colonización empresarial, que alcanza tanto a autoridades políticas como a una parte de la dirigencia de los pescadores artesanales.

Por ello, se indaga en la configuración del sector pesquero chileno, enfatizando en el conflicto histórico que lo estructura: aquel que enfrenta a pescadores artesanales e industriales por la explotación de los recursos del mar. Esto se aborda, por un lado, analizando los ciclos de lucha de la pesca artesanal en las últimas décadas y, por otro, a través del examen de los cambios que experimenta el empresariado de la pesca, sobre todo en los años noventa. Ambos elementos son observados a la luz de la escasez del recurso pesquero y el potencial colapso del fondo marino, conflictos que diferencian al sector de otros ámbitos de la economía.

I. LA POLÍTICA DE LA TRANSICIÓN Y LA DESARTICULACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE PESCADORES ARTESANALES

El conflicto entre la pesca artesanal y la industrial es de larga data en Chile. Ante el arrasamiento ecológico, biológico y reproductivo de las poblaciones marinas, los industriales han sido percibidos por los pescadores artesanales como actores depredadores que ponen en peligro su fuente de trabajo y sustento (al no respetar especies, tamaños ni edades), que distorsionan la oferta monopolizándola por su gran capacidad extractiva y que ejercen dumping al resistir la baja de los precios, pero con la posibilidad de cobrar después⁵.

1 Carvajal, C., Suzuki, J., y Vega, V. (2017, 3 de marzo). Servel entregó lista de aportes reservados legales de seis pesqueras a 35 políticos. *El Mercurio*. Recuperado de: <http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=340542>

2 Ramírez, P. y Sepúlveda, N. (2017, 20 de enero). Los correos que muestran los "favores" del subsecretario de Pesca a grandes pesqueras. *Ciper*. Recuperado de: <http://ciperchile.cl/2017/01/20/los-correos-que-muestran-los-favores-del-subsecretario-de-pesca-a-las-grandes-pesqueras/>

3 Sepúlveda, N. (2017, 6 de marzo). Nuevas boletas de pesqueras: \$445 millones pagaron Lota Protein, Asipes y Blumar a políticos. *Ciper*. Recuperado de: <http://ciperchile.cl/2017/03/06/nuevas-boletas-de-pesqueras-445-millones-pagaron-lota-protein-asipes-y-blumar-a-politicos/>

4 Carvajal, C. (2017, 26 de enero). Fipes: Iván Fuentes recibió de pesqueras 1,2 millones ya como diputado electo. *El Mercurio*. Recuperado de: <http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=330309>

5 Camus, P., Hidalgo, R., y Muñoz, E. (2016). Las disputas por el mar: bienes comunes, pescadores artesanales y pesca industrial. El caso de la caleta Cocholgüe en el litoral centro sur de Chile a mediados del siglo XX. *Población y sociedad*, 23(2), pp. 91-114.

En vista de esta amenaza, las organizaciones de pescadores artesanales, existentes desde comienzos del siglo pasado, han tenido como base a sindicatos de fuerte contenido reivindicativo. Sin embargo, la conformación de sus referentes nacionales sólo ha podido realizarse por la convergencia entre diferentes tipos organizativos, incluyendo asociaciones gremiales y cooperativas. Así, el primer organismo de articulación nacional del sector, la Federación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Fenaparch), se erige gracias a la fuerza alcanzada por un movimiento cooperativo pesquero que, en los años sesenta, resulta de la proliferación de cooperativas que sirvieron como medio para canalizar la ayuda nacional e internacional que les fue enviada a los pescadores artesanales afectados por el terremoto y maremoto que azotó a las costas del sur de Chile⁶.

Ese referente, que operó de todas maneras con mayoría de sindicatos, fue anulado tras el golpe militar de 1973. En su reemplazo, y mientras la represión anidaba en los puertos, especialmente contra los estibadores y pescadores, que fueron quienes más resistencia opusieron al régimen, la dictadura impulsó un reordenamiento institucional no sólo en el ámbito de la política pesquera del Estado, sino también sobre la forma de organización de la pesca artesanal. De este modo, se crea el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), y se promueven las asociaciones gremiales como única forma permitida de organización entre los pescadores artesanales, mientras los sindicatos son prohibidos. Estas medidas se imponían en el marco del plan impulsado por la Junta Militar para conseguir la adhesión ciudadana a través de organizaciones especializadas, lo que, en el caso de la Secretaría de los Gremios, apuntaba a controlar el movimiento sindical y a difundir el Plan Laboral que sentó las bases de la transformación productiva chilena⁷.

Con este giro forzoso, las asociaciones gremiales, cuyo propósito era racionalizar, desarrollar y proteger las actividades que le eran comunes al sector, crecen entre los pescadores al alero de una propaganda que destaca su flexibilidad para hacer negocios. Y ello, sumado a los criterios economicistas que se van imponiendo, basados en la premisa de aprovechar la abundancia del mar para apoyar el crecimiento económico de un modo consistente con el modelo de liberalización y apertura a los mercados globales⁸, deja sentadas las bases para que, paulatinamente, se produzca una corrosión del carácter proletario del actor artesanal, deviniendo en un pequeño empresario de la pesca que compite con sus propios colegas.

Ahora bien, no obstante sentadas las bases de este cambio, que se va a profundizar durante los gobiernos de la Concertación con el acceso a microcréditos y otros beneficios, éste deberá esperar ante los desafíos que exigen las precarias condiciones de trabajo de la pesca artesanal y el escenario político de la segunda mitad de los ochenta. Y es que, por esos años, se articula un movimiento social de pescadores artesanales guiado por el doble objetivo de mejorar su situación laboral y luchar por la democracia. Para lograrlo, las dirigencias del sector aprovechan los espacios de encuentro generados por el mundo universitario, especialmente en la V y VIII regiones, fraguándose el reconocimiento de una historia común (el anhelo por dar continuidad al proyecto de la desaparecida Fenaparch) y una alianza entre representantes de diferentes zonas del país, muchos de los cuales no se conocían hasta esas reuniones. Apoyan en este proceso, además, organismos internacionales de cooperación técnica y financiera (como FAO y PNUD), diferentes ONG locales y extranjeras, y la Iglesia y algunos políticos y partidos de la oposición. Así, de esta convergencia, que contó además con un contexto internacional favorable a la organización del sector, se crea en 1986 la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach)⁹.

El movimiento crece explosivamente en los últimos años del régimen, al crearse una serie de federaciones y consejos regionales en todo el país. Dentro de sus demandas, los pescadores artesanales apuntan a la falta de implementos para la extracción de recursos y problemas de comercialización, derivados de someterse a redes de intermediarios o empresas intervinientes en la transformación de los productos. También al acceso al crédito y a una modernización de la infraestructura portuaria

6 Escribano, I. (2014). *Movimiento social de pescadores artesanales de Chile*. Santiago: Ocho Libros.

7 Hunneus, C. (2000). *El régimen de Pinochet*. Santiago: Editorial Sudamericana.

8 Saavedra, G. (2013, marzo). La pesca artesanal en las encrucijadas de la modernización. Usos, apropiaciones y conflictos en el borde costero del sur de Chile. *Revista Andaluza de Antropología*, (4), pp. 79-102.

9 *Op. Cit.*, 6.

disponible en las caletas locales. Se preocupan, además, por organizar una comisión de defensa de la flora y fauna marina y de establecer vínculos y alianzas con organizaciones sindicales democráticas, pese al poco interés de una CUT abocada a las organizaciones de trabajadores dependientes. Por último, se crea un Centro de Educación e Investigación de la Pesca Artesanal (Cedipac), con el fin de sostener un proceso de renovación de sus cuadros dirigentes y proyectarse en el tiempo.

A poco de terminar la dictadura, en 1989, sus esfuerzos se orientan a enfrentar la primera Ley de Pesca y Acuicultura, conocida como “Ley Merino”, que, si bien se impulsaba como medida para defender los recursos marinos, reforzaba el antiguo deseo de los dueños de tierras por impedir actividades pesqueras en sus riberas y dejaba abierta la puerta al ingreso masivo de la inversión extranjera. En respuesta, la Conapach propone un anteproyecto alternativo, que aduce, entre otras cosas, la necesidad de contar con un Ministerio del Mar y que la Subsecretaría de Pesca no dependa del Ministerio de Economía, sino del de Agricultura, para evitar las determinaciones economicistas ya presentes en el sector.

Sin ser tomada en cuenta por las autoridades de la dictadura, sí son convocados a las sesiones legislativas con la llegada de Aylwin al poder. Más aún, como una de las primeras medidas de su gobierno, el mandatario se reúne con la Conapach y congela la “Ley Merino”, siendo ésta reformulada y promulgada en 1991, con el acuerdo de los pescadores artesanales. A esto se sumaría, asimismo, el desarrollo de un programa nacional de modernización de la infraestructura portuaria, que se llevó adelante en la primera mitad de los años noventa.

Ciertamente, esto no fue producto de la buena voluntad de las autoridades. La presión que ejercieron los pescadores artesanales sobre los parlamentarios de la Concertación fue clave, haciendo que su nivel de cohesión y coordinación –que les permitió movilizar a cerca de 100 mil personas en todo Chile– transformara a la Conapach en una organización ineludible para el gobierno¹⁰. El sustento de esa fuerza se correspondía con la capacidad de sus dirigencias para subordinar sus discrepancias políticas a un objetivo común y superior. De tal suerte, siendo parte de los movimientos sociales que lucharon por la democracia en los ochenta, el movimiento social de pescadores artesanales no logró ser cooptado por los partidos de la transición. Su fórmula: la permanencia de los rasgos sindicales que le dieron unidad y el carácter plural de sus directivas, en que convergían convicciones políticas opuestas, que de todos modos coincidían en acordar tareas y objetivos comunes relativos al movimiento.

Esto duró mientras se mantuvieron los objetivos estratégicos del movimiento social. Sin embargo, al agotarse, la propia diversidad que fortaleció a la organización se convirtió en caldo de cultivo para su paulatina desarticulación. Entre los factores que siembran el terreno para este proceso, se encuentran el abandono de la cooperación internacional –que debilita su acceso a recursos económicos– y del apoyo académico local –que tecnocratiza su visión sobre la industria pesquera, anteponiendo, en muchos casos, criterios de eficiencia y gestión a los de fortalecimiento de las organizaciones de pescadores y la defensa del mar. En este giro es fundamental el papel que ocupa el auge de la acuicultura del salmón en el sur del país, que relega la atención sobre la pesca artesanal y la pesca industrial. Síntoma de aquello es la inversión que hacen las grandes empresas pesqueras en institutos de investigación propios, en paralelo al desfinanciamiento estatal que experimenta la investigación sobre la pesca. Más aún, un símbolo de esto es el carácter privado del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), principal institución de fomento de la actividad pesquera en el país, y su lucha permanente por captar recursos estatales que, en su mayoría, son destinados a la acuicultura salmonera¹¹.

Por otro lado, pese a los esfuerzos de algunas universidades del norte y sur del país por apoyar a los pescadores artesanales, ésta orfandad su propio deterioro organizacional y estratégico permite que se profundicen las dinámicas de empresarialización de la pesca artesanal y, con ello, el procesamiento tecnocrático de los asuntos que afectan directamente sus intereses. Así, contando como telón de fondo la “modernización” de la industria, se despliega un aparato político-institucional que impone el juicio experto sobre situaciones que se ven como problemáticas entre los pescadores artesanales (pobreza,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

ineficiencia, arcaísmo, etc.), aun cuando esto no coincida con la percepción de los mismos afectados¹². Pero, además, los pescadores artesanales, integrados a la dinámica empresarial y competitiva de la pequeña y mediana industria pesquera, pierden de vista el paulatino encadenamiento productivo que experimentan sus actividades frente a las demandas de la gran industria, expresadas cabalmente en la necesidad no poco habitual de traspasar sus cuotas de pesca a los grandes grupos que controlan la explotación del mar en Chile.

Con todo, el factor más relevante en el proceso de desarticulación del movimiento social de pescadores artesanales es la intervención política de los partidos de la Concertación. En efecto, ya al quedar en evidencia el corte del flujo de financiamiento obtenido desde el extranjero (Noruega, Canadá, Alemania), se producen las primeras presiones de los partidos en democracia. Pero, además, también se vehiculan sobre el recambio generacional de las dirigencias, lo que sumado a las discrepancias e intereses particulares que internamente afectan a la Conapach, van generando las condiciones para la penetración del mundo concertacionista en las estructuras gremiales de la pesca artesanal¹³.

Al comenzar la transición, sin embargo, no pareció ser necesario este esfuerzo de cooptación: la trayectoria y vínculos previos entre los profesionales designados para los cargos públicos y los dirigentes de la pesca artesanal, permitieron a los gobiernos de Aylwin y Frei contar con la colaboración y apoyo de la Conapach, pese a la presión constante de esta entidad. Sin embargo, la temprana decisión concertacionista de fijar como tope de su política pesquera el evitar conflictuarse con los intereses heredados de la dictadura, especialmente en lo referente a las áreas de manejo y la zonificación del espacio para la pesca artesanal, dan la pauta de un creciente malestar entre los pescadores artesanales que se extendería durante la década.

Tras el recordado episodio de la masiva protesta que en Valparaíso significó la quema de una embarcación en las inmediaciones del Congreso en 1996, a propósito de la legalización de la pesca de arrastre en la zona protegida para la pesca artesanal, en 1998, en medio de la situación crítica que enfrentaban las plantas pesqueras del país, el gobierno de Frei, en la perspectiva de instaurar un instrumento que otorgara estabilidad al sector pesquero industrial, inicia negociaciones para la definición de las Cuotas Individuales Transferibles (CIT). Esta iniciativa, que contaba ya con una base material para su instalación, a propósito de la empresarialidad que experimentaba la pesca artesanal, atizó un cisma al interior de la Conapach, luego de que sus dirigentes se dividieran en torno a dar cabida o no al proyecto impulsado por el Ejecutivo. En ese trance, estallan las rivalidades políticas e intereses propios que venía sembrándose desde comienzos de la década, produciéndose la escisión de la organización, que da paso a un segundo referente con pretensiones nacionales: la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach)¹⁴.

Entre los años 2000 y 2002, la normativa estableció un régimen transitorio que introdujo los Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA) –sucesores de las CIT–, los cuales implementaron la distribución anual de una cuota global de captura, tanto para los industriales como para la pesca artesanal. Como se sabe, esto benefició claramente a los primeros, con cuotas exageradamente mayores, a lo que se sumó un nuevo conflicto contra la iniciativa del senador Andrés Zaldívar –cuya familia concentra históricos intereses en la pesca industrial del norte del país– de legislar un proyecto de “Ley Corta” que buscaba ampliar las cuotas hacia el norte¹⁵, y que fue incluido por La Moneda en la Agenda Pro Crecimiento que acuerda con la Sofopa el gobierno de Ricardo Lagos.

El proyecto provocó la reacción de los pescadores artesanales, quienes presionaron al Parlamento para bloquear el proyecto. Sin embargo, ante ello, el gobierno prefirió proponer un acuerdo alternativo en que se prorrogaba esta fase transitoria de captura por otros diez años más. Esto radicalizó a los pescadores artesanales confederados en la Conapach, quienes se manifestaron por semanas a las afueras

12 *Op. Cit.*, 8.

13 *Op. Cit.*, 6.

14 *Ibid.*

15 Skoknic, F. (2015, 25 de junio). La mano derecha de Angelini que entregó los fondos para la pre-campaña de Bachelet. *Ciper*. Recuperado de: <http://ciperchile.cl/2015/06/25/la-mano-derecha-de-angelini-que-entregó-los-fondos-para-la-pre-campana-de-bachelet/>

del Congreso, alcanzando un compromiso transversal con algunos diputados y senadores que apoyarían su contrapropuesta de reducir la extensión a solamente un año, con el fin de acortar los tiempos para discutir un nuevo proyecto. El acuerdo, empero, no se cumplió, y la prórroga terminó aprobándose con votos de algunos de los parlamentarios comprometidos¹⁶. Esto, ciertamente, dio las primeras luces de la debilidad en que caía el movimiento social de pescadores artesanales tras su escisión.

La constante imposición de los intereses industriales en la política pesquera, con beneplácito de los gobiernos de la transición, tensionó la relación entre sectores del gobierno y los pescadores artesanales, irrumpiendo estos últimos como actores protagonistas de una serie de demandas de carácter económico-corporativo vinculadas, fundamentalmente, a la reasignación de cuotas de pesca entre el sector artesanal e industrial. En ese marco, es que, para consagrar el contexto privatizador, el año 2012 se promulga la Ley 20.657, conocida como “Ley Longueira”, la cual, bajo un discurso enfocado en una supuesta sustentabilidad de los recursos pesqueros¹⁷, da continuidad a la política de la transición para el sector que años antes había empujado el gobierno de Ricardo Lagos, enajenado las principales pesquerías del país al entregar por 20 años los derechos de pesca a la gran industria.

La Ley de Pesca determina un favorecimiento ilegítimo del sector industrial, sofocando el oficio artesanal y propiciando su fraccionamiento en términos de organización. La entrega en exclusiva, dentro del mundo artesanal, de derechos de pesca sólo a los armadores (dueños de embarcaciones)¹⁸, ha dejado a tripulantes sin derecho a cuota y a pescadores jóvenes en la imposibilidad de ejercer legalmente el oficio. Esto empuja a la reconversión laboral, mediante programas de turismo y emprendimiento¹⁹, desarraigando las tradiciones pesqueras de la reproducción social, y, sobre todo, barriendo con el actor social que ha enfrentado con mayor determinación la privatización del mar. Es por esto que la principal demanda de las organizaciones de los pescadores artesanales es la anulación de la Ley de Pesca, voto político asumido en febrero del 2014 en el congreso de pescadores artesanales en Corral²⁰.

Hoy, en términos generales, el sector artesanal presenta conflictos derivados de su actividad productiva: por un lado, la actividad bentónica y de orilla, en que las conflictividades están asociadas a la defensa territorial; y, por otro, las pesquerías pelágicas, demersales y jibieras, que enfrentan al sector industrial por las cuotas asignadas para ambos sectores²¹. Dichas situaciones, presentan diversas dimensiones conflictivas, ya sean socioambientales, por el agotamiento de los recursos o en torno a la defensa del trabajo, todas las cuales están definidas por la categoría del trabajo artesanal, sea de orilla o de altura. Subyace una diferencia, además, entre tripulantes y armadores, en donde los primeros empujan a obtener mejores condiciones laborales respecto a los segundos, que son los dueños de las cuotas; y, por último, entre armadores industriales y artesanales, cuyo antagonismo tiene que ver con la distribución general de las cuotas de pesca.

La heterogeneidad del mundo pesquero artesanal ha modificado el carácter de sus movilizaciones, haciendo compatibilizar el universo de intereses que hay detrás de cada organización, lo que ha replanteado el carácter de la movilización de los pescadores nacionalmente. Siendo no sólo protagonistas de movimientos corporativos, se han expresado en la idea de proponer una dirección a las movilizaciones sociales, donde la pesca es uno de los elementos centrales del trabajo y la economía. Así, las estructuras sindicales pesqueras representan un esqueleto social importante para sostener procesos de envergadura como el Movimiento Social de Aysén, las movilizaciones contra HidroAysén o el cuestionamiento al destino de los recursos pesqueros, ante lo cual, junto a organizaciones sociales,

16 Jofré, J. y Wetli, L. (2003, enero). Pescadores desafían a “tiburones” del mar. *Punto Final*, (535). Recuperado de: <http://www.puntofinal.cl/535/>

17 Ver Nueva Ley de Pesca y Acuicultura (N° 20.657) en: <http://www.subpesca.cl/prensa/601/w3-propertyvalue-2832.html>.

18 ISCI. (2011). Situación de la pesca en Chile, análisis desde la economía y nueva ley. *Revista ISCI*, (9), pp. 17-19. Recuperado de: <http://www.isci.cl/wp-content/uploads/R09A08.pdf>

19 Aqua. (2016, 1 de julio). Pesca artesanal: Reconversión con “mirada al mar”. *Aqua*. Recuperado de: <http://www.aqua.cl/reportajes/pesca-artesanal-reconversion-con-mirada-al-mar/>

20 Revista Bagual. (2015, 9 de abril). Pescadores artesanales se movilizan por la anulación de la Ley Longueira. Recuperado de: <http://www.revistabagual.cl/2015/04/pescadores-artesanales-se-movilizan-por.html>

21 Aqua. (2015, 3 de junio). Los argumentos de los artesanales para tener la exclusividad pesquera del bacalao de profundidad. *Aqua*. Recuperado de: <http://www.aqua.cl/2015/06/03/los-argumentos-de-los-artesanales-para-tener-la-exclusividad-pesquera-del-bacalao-de-profundidad/>

se levanta la preocupación por la soberanía alimentaria. En esto último, el lema de “los peces para Chile y las necesidades de su pueblo”²² con que el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) ha empujado la nulidad de la Ley de Pesca y rechazado la privatización del mar, supone un esfuerzo por concientizar acerca del rol de la pesca en la sociedad.

II. CONCENTRACIÓN ECONÓMICA Y UNIDAD DEL EMPRESARIADO PESQUERO

La contracara de la desarticulación social de los pescadores artesanales es la concentración económica del sector y la unidad que alcanza su gran empresariado en las últimas décadas. Para que esto ocurriera, sin embargo, han debido profundizarse las dos dinámicas mediante las cuales se estructura habitualmente la relación de este actor con la actividad pesquera. Por una parte, la tendencia de los grandes empresarios de la pesca a fusionarse y a integrar verticalmente las diversas áreas de negocio (extractiva, industrial y comercial), disminuyendo con esto los competidores existentes, sobre todo como reacción a las oleadas de escasez de recursos del mar que se repiten periódicamente desde la segunda mitad del siglo pasado. Por otra, han debido empeñarse en hacer funcional a sus intereses inmediatos la legislación vigente, que rige las dinámicas de extracción de la pesca artesanal e industrial, en la medida que la industria pesquera es altamente sensible (y dependiente) de la acción estatal, sobre todo en lo que respecta a su promoción y desarrollo.

El Estado ha intervenido en el conflicto entre la pesca artesanal e industrial, ejerciendo como promotor de esta última y como mediador a la hora de establecer los acuerdos de propiedad sobre los recursos marinos. Si bien los antecedentes de esta mediación se remontan al siglo pasado, es al alero del desarrollismo que, en la década de 1940, se reconocen las potencialidades del mar, al tiempo que la industrialización de la pesca se transforma en una política de Estado. La Corfo lidera este proceso, apoyando a la pesca industrial en aspectos como exploraciones marinas, incremento de la producción, industrialización, consumo y propaganda, llegando a crear empresas propias para la extracción, distribución y venta de pescado fresco²³. En los sesenta, con el aval internacional de una FAO que impulsa políticas alimentarias sustentadas en los productos del mar y que alienta a los industriales a privilegiar la producción de harinas, se sellan los incentivos para que estas compañías orienten su actividad al comercio internacional, favoreciendo las lógicas de circulación globales.

Lo habitual en las políticas pesqueras nacionales, además, ha sido su carácter cortoplacista y escasa preocupación por los equilibrios ecológicos marinos. Vía programas específicos, especialistas de agencias sectoriales y marcos jurídicos, reglamentaciones y diseños de uso, se ha instalado una institucionalidad pensada para la industria, que, por aquello, obligó por largo tiempo a los pescadores artesanales a proteger sus intereses tomando como base la condición legal de bien común de los espacios litorales y no una legislación específica²⁴.

Esta orientación industrial de las políticas estatales, sin embargo, a menudo no se ha hecho cargo de la desidia con que la pesca industrial, por su inherente interés de acumulación, se vincula con el ecosistema marino. Así, por ejemplo, en 1960 se dicta un decreto con fuerza de ley (DFL N°266) que entrega franquicias y beneficios fiscales a la pesca industrial, permitiendo la instalación de una serie de industrias pesqueras en el litoral chileno, especialmente en el golfo de Arauco y en el extremo norte del país. Sin embargo, al cabo de cinco años, la sobreexplotación de anchoveta y el fenómeno de El Niño se conjugan para hacer tambalear a la naciente industria que, además, se encuentra endeudada en decenas de millones de dólares con la Corfo. En la zona norte, esa crisis mostró a los dueños de las compañías que la fragmentación de sus empresas, que duplicaban esfuerzos administrativos y productivos, constituía un problema que debía superarse, razón por la cual se opta por la integración y fusión de éstas, dando paso al Consorcio Pesquero del Norte (Corpesca)²⁵.

22 Bavestrello, G. (2014, 18 de noviembre). Pescadores artesanales de Chile en estado de alerta por Ley Longueira. *El Desconcierto*. Recuperado de: <http://www.eldesconcierto.cl/2014/11/18/pescadores-artesanales-de-chile-en-estado-de-alerta-por-ley-longueira/>

23 Op. Cit., 5.

24 Ibid.

25 Ibid.

A esta situación le siguen, en dictadura, una verdadera explotación desmedida, tanto de industriales como de pescadores artesanales, que encienden las alarmas sobre el agotamiento del recurso. Ello obliga a la intervención de la Junta a través de la preparación de la “Ley Merino”, base, pese a sus cambios, de la posterior Ley de Pesca y Acuicultura de 1991. En torno a esta legislación, que concitó importantes acuerdos en todo el sector -pese a los reclamos iniciales del gremio industrial y del grupo Angelini que habló de una “reforma agraria del mar”-, se fragua el primer triunfo del empresariado de la pesca en los años de la postdictadura al torcer su sentido original. En efecto, esta ley buscaba entregar definiciones regulatorias a partir del establecimiento de una franja de cinco millas marinas para la pesca artesanal, la definición de áreas de manejo para la explotación de recursos del borde costero y la exigencia de un informe técnico sobre la situación de aquellos recursos a explotar por tener un interés comercial, entre otras medidas.

Pero el objetivo no se cumple, pues si bien la ley limitaba el número de naves y la capacidad de bodega que podía tener cada empresa²⁶, antes que reducirse la pesca intensiva ésta terminó aumentando por efecto de la inversión en tecnología que hicieron las grandes empresas, logrando más eficiencia y autonomía en sus flotas y procesos extractivos. Esto fue logrado al precio de reorganizar sus estructuras organizativas con el objeto de disminuir sus costos, para lo cual las compañías se desprendieron de un alto número de puestos de trabajo²⁷.

Con este hito inicial, el camino adoptado por las sucesivas actualizaciones de esta ley general es similar, y sigue favoreciendo la acumulación empresarial de las grandes pesqueras en desmedro de la pesca artesanal. Después de su revisión a comienzos de los dos mil, una medida clave en la continuidad de este hecho, es la partición del borde costero en cuatro grandes zonas, que han dado lugar a la aparición de una suerte de “fondos marinos” con los que se extiende al espacio marino-costero el criterio regional que divide al país. En ese sentido, además de promoverse la concentración económica, una medida como esta, al buscar que cada región terrestre tenga su proyección hacia el mar, fragmenta administrativamente la lógica tradicional de desplazamiento longitudinal de las flotas pesquero-artesanales. Por otro lado, desde su implantación, y pese a que para sus defensores constituye la forma más eficiente de racionalizar los recursos marinos, la introducción de las CTI y luego de las LMCA, han llevado a una distribución desigual de las cuotas de pesca, al tiempo que han consolidado la propiedad sobre éstas y limitado el ingreso de nuevos operadores a la pesca debido a su alto costo²⁸.

Esto permite entender que, al llegar 2012, cuando se debía volver a revisar las cuotas de captura transitoria, las autoridades se enfrentan a un escenario de alta concentración de la explotación del recurso marítimo en unos cuantos gigantes, controlados por nueve grupos económicos que exhiben ser dueños del 90% de la pesca industrial de jurel, anchoveta y sardina. Pero, a contrapelo de lo esperado, la fórmula propuesta desde el Ejecutivo fue asignar las cuotas de pesca en función del historial pesquero de los anteriores cuatro años y de la capacidad de bodega de las empresas. Con esto, se benefició directamente a los grandes pesqueros, a la vez que significó un nuevo incentivo para la concentración del sector, en la medida que las pequeñas cuotas que se le otorgaron a los competidores de menor tamaño hizo imposible, en el largo plazo, seguir operando, obligándolos a vender sus barcos y cuotas a las grandes empresas²⁹. Peor aún, la Mesa de Trabajo Pesquero de 2011, si bien consiguió una mejora en el porcentaje de pesca de los pescadores artesanales, no hizo sino reconocer legalmente esta concentración existente, sellando legalmente los que, en los hechos, torció todo el entramado legislativo que viene operando desde inicios de la transición³⁰.

26 Ver Ley General de Pesca y Acuicultura (N° 18.892 y sus modificaciones) en: http://www.subpesca.cl/normativa/605/articles-516_documento.pdf

27 Fazio, H. (1997). Mapa actual de la extrema riqueza en Chile. Santiago: Lom Ediciones.

28 Peña Torres, J. (2002). Debate sobre Cuotas Individuales Transferibles: ¿“privatizando” el mar? ¿subsidios? O ¿muerte anunciada de la pesca extractiva en Chile? *Estudios Públicos*, (86), pp. 183-222.

29 Op. Cit., 15.

30 Caviedes, S. y Bustamante, A. (2015, agosto). La red de arrastre estatal: la influencia empresarial del grupo Angelini. *Cuadernos de Coyuntura*, (9), pp. 39-50.

Lo anterior, además, revela la consecuencia más visible de esta concentración económica: la unidad con que operan las asociaciones gremiales de los industriales. Y es que, al concentrarse la propiedad y reducirse la cantidad de actores que se disputan la industria, el incentivo a la unidad crece, del mismo modo que lo hace la capacidad de determinación que tienen gremios como Sornapesca y Asipes sobre la discusión y negociación políticas sobre la pesca.

Pero, además de esta unidad empresarial, lo que se forja es un vínculo orgánico entre el empresariado y la política, que hace que el proceso de ascenso de los grupos empresariales fortalecidos en torno a la pesca tenga un correlato desde el Estado. Esta alianza ha quedado demostrada en el hecho de que, pese a que la Ley de Pesca de 2012 viene siendo considerada ilegítima de manera transversal por sectores mayoritarios de la sociedad chilena, los únicos actores que siguen legitimándola, por acción u omisión, son el Gobierno y el empresariado.

III. EL AGOTAMIENTO DEL RECURSO PESQUERO: LA ESPECIFICIDAD DE LA CRISIS

Según se ha dicho, la escasez de los recursos pesqueros y, en general, de los productos del mar, es una situación que se presenta cada tanto en Chile, desde que se promueve su explotación intensiva por parte de la industria pesquera y la acuicultura. Pues bien, ese es un elemento determinante para las dinámicas sociales y económicas que se producen en este sector, dotándolo de una especificidad que -por así decirlo- distorsiona el comportamiento empresarial y de los trabajadores organizados, haciéndolo diferente de otros sectores de la economía al considerarse variables similares tales como la concentración económica y la desarticulación social, que son distintivas del proceso social y político iniciado hace más de cuarenta años en Chile.

En particular, la acuicultura del salmón ha liderado, con su expansión y la cantidad de recursos -marinos y humanos- que moviliza, la profundización de este problema socio-ambiental. En efecto, las sucesivas leyes de Pesca y Acuicultura de la postdictadura proveen toda clase de facilidades y garantías a los inversionistas para potenciar esta industria en el sur de Chile. La misma fue impulsada, entre 1969 y 1995, a través de programas de cooperación internacional de transferencia tecnológica y recursos humanos, pero se convirtió, en los noventa, en eje económico prioritario para la zona sur-austral como clúster estratégico. Gracias a incentivos como un clima de estabilidad política, flexibilidad laboral y mínimas restricciones para expandir espacios de cultivo, durante esta década alcanza una magnitud que desborda el borde costero interior de la isla de Chiloé, el Estuario de Reloncaví y gran parte de la ciudad de Puerto Montt, saturando estas zonas con centros de engorde.

Hacia los dos mil, se inicia una segunda fase expansiva, en que proliferan las jaulas de cultivo a los canales y fiordos ayseninos, al tiempo que se inicia la zonificación y microzonificación del borde costero de esa región. De aquello deriva una distribución del borde costero que deja prácticamente la mitad del archipiélago como zona apta para actividades de acuicultura, siendo concesionados para las empresas salmoneras espacios marinos ocupados tradicionalmente por la flota pesquero-artesanal. Sin embargo, tras varios años de crecimiento continuo, se produce la crisis de 2007. Provocada por factores económicos internacionales y por la crisis sanitaria que sobrevino a causa de las condiciones de producción de los salmones (que propagó el virus ISA), se produce un colapso que hace caer en un 30% el PIB total de las regiones de Los Lagos y Aysén y que aumenta el desempleo de la zona en más de un 50%³¹.

Con todo, y más allá de esta racionalidad que busca optimizar rendimientos en la acuicultura, bajar costos y el estándar de las medidas ambientales, se debe tener en cuenta que hoy, a diferencia de otros momentos en la historia del sector pesquero chileno, se torna más amplio y profundo el agotamiento de los recursos marinos. Esto lo demuestra un reciente informe de la Subpesca sobre el estado de las 25 principales pesquerías chilenas en 2016, en donde se sostiene que el 60% de éstas se encuentran agotadas o sobreexplotadas. Esto significa que tales pesquerías no tienen la capacidad de ser sustentables en el tiempo y su nivel de captura es muy inferior a su nivel histórico debido a la

31 Op. Cit., 8.

significativa disminución de estos recursos. Aquello sucede cumpliéndose casi una década sin signos de recuperación³².

En el caso de los actores del sector, si bien estas cifras conllevan un escenario general compartido, la forma en que los afecta y el modo en que se procesa, abre márgenes de maniobra muy diferentes. En el caso de los pescadores artesanales, en estas condiciones de alta explotación, cualquier crecimiento en las cuotas de pesca -como el obtenido el año 2012- debe calcularse en relación al déficit que experimenta el recurso marítimo, lo que, en los hechos, reduce al mínimo su capacidad de negociación. Pero, además, desde el punto de vista de su actividad laboral, ante este panorama, muchos pescadores artesanales y mariscadores han ido mutando y reorientando su actividad extractiva hacia otros recursos como las algas. En el norte del país, por ejemplo, el desempleo en la minería y otros sectores, los efectos de la sobrepesca y el desarrollo de las exportaciones de algas han abonado el crecimiento de esta actividad económica, trasladando el problema de la sustentabilidad ahora al cuidado del bosque marino, pese a la existencia de una normativa y zonas reguladas³³.

Por su parte, entre el empresariado de la pesca, esta crisis genera incentivos para una nueva reestructuración. Ese es el camino que ha adoptado Corpesca para este año, cuando lleve adelante una capitalización por US\$ 90 millones y un plan de reestructuración de sus áreas de desarrollo. El contraste que se genera entre las pérdidas de su área pesquera versus los buenos resultados que muestra en las líneas de elaboración de concentrados de alimentos, fomentado por el fenómeno climático de El Niño, llevó a que en 2016 sus capturas bajaran un 63% con respecto a 2014 y, en la sumatoria de los 2015 y 2016, ello se tradujera en pérdidas por US\$ 122 millones. De tal suerte, parece probable que Corpesca comience a deshacerse de su área de extracción, continuando la tendencia por la cual, en los últimos años, el grupo Angelini ha ido relegando, frente a los demás rubros en que participa, a la actividad con la que hizo su fortuna, al rezagarse la proporción de sus utilidades respecto al patrimonio de la compañía. Y, por cierto, como cuando en los años noventa los industriales pesqueros decidieron fusionar sus empresas, medidas de este tipo tendrán consecuencias en el empleo.

IV. LA RECONSTRUCCIÓN DEL MAR CON UNIDAD Y AUTONOMÍA

Siguiendo una tendencia histórica, desde los noventa a la fecha decanta un largo proceso por el cual, a través de una legislación funcional al interés empresarial y una serie de incentivos económicos provistos por el Estado, se propicia, de un lado, la unidad del gran empresariado pesquero y una alta concentración de este sector; y, de otro, se quiebra la cohesión del movimiento social de pescadores artesanales con que se inicia la transición, a la vez que se profundiza la crisis en la sustentabilidad de su fuente de trabajo. Esto ocurre, a riesgo de que los recursos marinos experimenten un colapso definitivo, que exceda los ciclos de agotamiento del recurso que periódicamente afectan al borde costero chileno. De este modo, en el caso del sector pesquero, a la habitual tendencia de las últimas décadas a asegurarle nichos de mercado regulados a los grandes grupos empresariales, se suma la destrucción, en democracia, del tejido social y político que podría haber dado expresión social al conflicto entre la pesca artesanal y la gran industria.

Lo anterior permite entender, por tanto, que el amaño y la corrupción asociadas a la última Ley de Pesca, que ha vinculado a políticos y empresarios y que ha generado un sinnúmero de notas de prensa, no es lo sustantivo del asunto. Por el contrario, si la nueva legislación propicia una mayor concentración en el sector pesquero, no es como consecuencia de la corrupción, sino que de la crisis socio-ambiental de la pesca en Chile. Es decir, que en la medida que se agotan aceleradamente los recursos marinos, una ley como la promulgada en 2012 cumple el papel de producir el necesario reordenamiento que necesita el capital pesquero para continuar con sus niveles de acumulación. La ley, por lo tanto, pasa a ser sólo un

32 Subpesca. (2017, marzo). Estado de situación de las principales pesquerías chilenas, año 2016. Recuperado de: http://www.subpesca.cl/publicaciones/606/articles-96618_recurso_1.pdf

33 EFE. (2017, 12 de marzo). La extracción de algas en Chile es más rentable que la pesca artesanal. *El Mostrador*. Recuperado de: <http://www.elmostrador.cl/vida-en-linea/2017/03/12/la-extraccion-de-algas-en-chile-es-mas-rentable-que-la-pesca-artesanal/>

medio, se transforma en el costo a pagar para que el gran empresariado pesquero mantenga sus tasas de ganancia, las cuales de todos modos se ven afectadas en alguna medida, tal como lo ejemplifica la situación de Corpesca, antes reseñada. La irracionalidad del capital, de nuevo, choca con la crisis ecológica que provoca.

De allí que no sea raro divisar medidas estatales que jueguen al límite del riesgo ecológico, tal como ha denunciado el Condepp respecto a la decisión de la Subpesca de autorizar el máximo de cuotas para todas las especies agotadas, pese a las sugerencias de los Comités Científicos Técnicos. Mientras los intereses empresariales estén imbricados con los de quienes hacen las legislaciones y toman las decisiones de política pública, se seguirá haciendo todo lo posible por salvaguardar este nicho de negocio desde el Estado, pese a la amenaza de colapso ecológico.

Ahora bien, frente a los avances del empresariado, el mundo pesquero artesanal ha levantado conflictos que producen una reorientación política de sus esfuerzos de organización. Por un lado, un sector proclive a la línea gubernamental y pro-empresarial, vinculado sobre todo a la Conapach; y, por otro, la emergencia de nuevas organizaciones asociadas a la radicalización del movimiento pesquero, dentro de las cuales se encuentra el Condepp. Estas nuevas organizaciones son prueba de la necesidad de reorganizar el sector con autonomía plena del empresariado y con recelo de la fracasada conducción realizada por las dirigencias concertacionistas. Esto ha permitido un viraje en su política de alianzas hacia el mundo social organizado, dentro del cual se cuenta, por ejemplo, el movimiento estudiantil.

El carácter de la avanzada de los pescadores artesanales ha puesto en jaque a la institucionalidad chilena. Ante las movilizaciones por la nulidad de la Ley de Pesca, un hecho completamente inédito en la historia del país (la anulación de una ley por su origen espurio), se levanta una contraofensiva empresarial y política que apunta a la desarticulación y el descabezamiento de las organizaciones más radicalizadas. Esto pone en peligro la proyección de los intereses del sector artesanal levantados desde el 2012, ya golpeados por la aplicación de la ley de pesca.

La resolución de este conflicto aún se encuentra en disputa. La única forma de evitar la eternización del dominio de los intereses del capital extractivista sobre los recursos marinos, y la consiguiente crisis ecológica asociada a esta, es que los actores del mundo artesanal reoxigenen sus organizaciones, dotándolas de la unidad y autonomía necesarias para enfrentar al empresariado, empujando demandas que reorienten la política pública en pos de resguardar los intereses de la pesca artesanal y de la sociedad en su conjunto. ▼

Crisis y declive laborista: **EL CAMINO AL BREXIT**

Francisco Figueroa



Fuente: <http://revistafal.com/>

RESUMEN:

Pese a producirse contra la voluntad del establishment político y económico británico, el *Brexit* no significó una impugnación democratizante al proyecto neoliberal de integración europea. Se produjo, en cambio, como rechazo al cierre de las elites políticas locales en un contexto de crisis económica y de representatividad. Determinante para abrir paso al nacionalismo como clave predominante de esta impugnación fue la pérdida de influencia del Laborismo sobre sus bases históricas. De este modo, la coyuntura británica en particular y la europea en general, alerta sobre las corrosivas consecuencias para la democracia del declive de la izquierda en los países del capitalismo avanzado.

PALABRAS CLAVE:

- **Brexit**
- **Unión Europea**
- **Globalización**
- **Partido Laborista**
- **Neoliberalismo**

Lejano se ve el optimismo que las movilizaciones sociales anti-globalización en Europa y la crisis financiera de 2008 sembraron entre quienes creyeron ver amenazado el orden neoliberal heredado de la década de los '70. Con la excepción de España y Portugal, es la derecha y no la izquierda la que en Europa hace gala de contar con mejores recursos para empoderarse a partir de las contradicciones del capitalismo avanzado. Nuevos proyectos excluyentes y nacionalistas campean en los países del norte, algunos ya desde el gobierno (como en Hungría, Ucrania, Polonia, Serbia o Rusia) y otros cerca de conquistarlo (Francia o Austria) o de consolidarse en la primera división del sistema de partidos (Holanda, Alemania, Suiza, Suecia o Italia).

Tal vez ese mismo lejano optimismo sea lo que impidió que el avance de estas derechas, visible desde la década de 1990, fuera advertido y confrontado. Es que si hasta hace poco para liberales y social-demócratas el tránsito de las sociedades europeas hacia una mayor integración económica y cultural era cosa de tiempo, para los menos autocomplacientes la globalización sería cada vez más contestada, pero siempre en nombre de un mayor control democrático sobre los destinos colectivos. Las influyentes reflexiones sobre Europa de Anthony Giddens y Jürgen Habermas¹ ilustran, respectivamente, dichos ánimos. Al menos ese era el cuadro dominante en Reino Unido hasta principios de 2016. Para las capas dirigentes del Laborismo y los movimientos sociales anti-neoliberales, el triunfo del *Brexit* –acrónimo de campaña para 'British Exit'– no era posible hasta que fue una realidad. Y su impacto ha sido formidable.

Si desde fines de los '90 el agotamiento del otrora vigoroso bipartidismo conservador-laborista se venía expresando de modo pasivo, con el aumento de la abstención electoral y la emergencia de partidos tan independientes como insignificantes, hoy escala a una crisis de representación que ha terminado por torcer el rumbo del país a contrapelo de lo más poderoso de su establishment. La derrotada postura por permanecer en la Unión Europea fue defendida por el grueso del sistema de partidos, del Partido Laborista y de la mayoría del Partido Conservador –incluyendo al ex primer ministro David Cameron–, además de los partidos Verde, Liberal-Demócrata, Nacional Escocés y del galés Plaid Cymru. Su principal desafiante ha resultado ser un extendido e inorgánico descontento anti-elitario, más articulado por sentimientos nacionalistas que por una oposición al consenso neoliberal en base al cual dichas elites han gobernado. A la cabeza de esta postura se situaron los euroescépticos del Partido Conservador y el nacionalista Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP).

El proyecto de integración europeo, en tanto, ha sufrido uno de sus reveses más duros. No tanto por la salida del Reino Unido en sí² –que, en su alianza con EEUU y oposición al incremento de la influencia de Alemania y Francia, siempre ha resistido el fortalecimiento de la UE– sino por su impacto en el continente. Si las recientes revueltas anti-austeridad en Grecia, España y Francia pusieron en vilo la continuidad del apoyo social pasivo del que se había beneficiado durante medio siglo la UE y su predecesora Comunidad Económica Europea³, el *Brexit* ha favorecido el posicionamiento de los diversos movimientos de extrema derecha que florecen en el continente como las fuerzas en mejores condiciones para asestarle el tiro de gracia.

El presente artículo examina las tensiones incubadas en la sociedad británica que determinaron el resultado del referéndum y la recientemente activada salida británica de la Unión Europea. Se identifica una polarización en la valoración social de los efectos de la globalización neoliberal y una honda fractura entre el Laborismo y sus bases históricas. Al abandonar el Partido Laborista su anclaje en las clases trabajadoras y su vocación por representar en la política sus aspiraciones, en una situación de crisis económica se gestó en éstas un rechazo a la política en cuanto tal, campo que resultó fértil para el resurgimiento del nacionalismo. Finalmente, se advierte sobre el debilitamiento de la democracia representativa producido por el declive de la influencia de la izquierda sobre las mayorías trabajadoras en Europa.

1 Véase Giddens, A. (2007). *Europa en la era global*, Barcelona: Paidós; y Habermas, J. (2012). *La constitución de Europa*, Madrid: Trotta.

2 Para una revisión de las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea, explorar: <http://ukandeu.ac.uk/fact-figures/>

3 Véase Anderson, P. (2009) *El Nuevo Viejo Mundo*, Madrid: Akal, pp 19-92

I. EL REFERÉNDUM: LA GLOBALIZACIÓN A LA PIZARRA

Con el 52% de los votantes optando por sacar al Reino Unido de la Unión Europea y una participación del 72,2% de los electores, el referéndum fue la elección más convocante desde las generales de 1992⁴. No obstante, la cuestión de la inmigración ocupó un lugar protagónico en el debate, en la práctica el *Brexit* fue un referéndum sobre una variedad de asuntos públicos. Votantes y activistas fueron movilizados a partir de la preocupación por la cobertura y calidad de los servicios sociales, los salarios y la seguridad laboral, y la representatividad de la elite política. Junto a la propuesta de endurecer aún más las ya poco amistosas fronteras británicas, la idea más machacada por los impulsores de la salida fue que con ella el Estado podría disponer de recursos frescos hoy destinados a la UE para mejorar el alicaído Servicio Nacional de Salud. Poco importó si los problemas criticados y las mejoras prometidas dependían efectivamente de la membresía británica en la Unión (peculiar paradójicamente por su alto grado de autonomía). Impulsores y detractores sabían por igual que ni la inmigración ni mucho menos la “cuestión europea” eran suficientes para por sí solas producir una mayoría electoral (la segunda siquiera para llevar una cantidad digna de gente a las urnas), y actuaron en consecuencia.

El resultado no sólo fue suficiente para darle legitimidad al referéndum, sino además tuvo el mérito de sobreponerse a 24 años de sostenida disminución en la participación electoral. Destacó también en el contexto continental. La participación en elecciones europeas, tanto para el Parlamento Europeo como para referéndums relativos a políticas específicas, venía declinando hasta situarse por debajo del 50% en promedio⁵. Lo que en esta ocasión revirtió el desinterés público, sin embargo, no fue la UE misma, sino el hecho de que por primera vez se la relacionaba con los problemas más acuciantes de la sociedad británica, como el estancamiento de los salarios, el agresivo aumento de la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos. Dilemas con raíces en las reformas neoliberales implementadas por Margaret Thatcher en los '80 y luego legitimadas por el Nuevo Laborismo de Tony Blair, pero especialmente palpables a contar de los recortes al gasto social impuestos tras la crisis financiera de 2007-2008.

En cuanto al rechazo a la inmigración, bandera del voto *Leave* (salida) más duro y vociferante, su arraigo es reciente pero ya indisoluble de la UE. La inmigración aparece como un “problema” para una porción significativa de la población británica sólo a contar de fines de la década de 1990, para luego cobrar especial fuerza desde 2005⁶. Durante el mismo periodo, la inmigración experimenta un marcado incremento, especialmente tras el ingreso a la UE de países de la ex órbita soviética de Europa del Este. Desde 2013, de hecho, Europa y ya no los países de la Commonwealth es la principal fuente de la inmigración total al Reino Unido⁷. Así, en 2015 la mayoría de los británicos críticos de la UE lo eran también de la inmigración. En 1975, en cambio, cuando los británicos votaron a favor de ingresar a la UE, sólo un cuarto de quienes se opusieron pensaba que había “demasiados” inmigrantes⁸.

El *Brexit*, de esta forma, abrió una coyuntura en la que estuvo en evaluación todo aquello que la Unión representaba para la sociedad británica, la globalización, poniendo de manifiesto la creciente polarización de las valoraciones sociales sobre el impacto de este proceso en la sociedad británica. Un proceso económico, político y cultural experimentado de modos radicalmente opuestos por los distintos grupos sociales. La fisonomía de la votación, su composición social y distribución geográfica y etaria, ilumina con notable nitidez la fisonomía de quienes han ganado y perdido con la gran transformación de la sociedad británica de los últimos treinta años.

4 Para una revisión de los resultados del referéndum 2016, explorar: http://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results

5 *Op. Cit.*, 3.

6 Evans, G., and Mellon, J. (2016) Immigration and Euroscepticism: the rising storm, *The Guardian*. Recuperado desde: <https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/dec/18/immigration-euroscepticism-rising-storm-eu-referendum>

7 *Ibid.*

8 *Ibid.*

La población más educada y aventajada, principalmente vinculada a la industria de los servicios y radicada en el sudeste inglés, Escocia e Irlanda del Norte, votó mayoritariamente a favor de permanecer en Europa. Londres fue el epicentro, ciudad que concentra el crecimiento económico del país, las grandes riquezas y la burocracia gubernamental. Allí fluyen el dinero derivado del capital financiero y las redes que permiten la reproducción de la elite gobernante a través de las universidades más prestigiosas, el aparato central del Estado, organismos internacionales y las casas matrices de las grandes empresas. Los inmigrantes, pese a alcanzar el 40% de la población londinense, no suponen una amenaza para estos segmentos, pues se concentran en la clase obrera de servicios y de la construcción. Esta elite se beneficia de la liberalización de los flujos de capital y está en condiciones de ejercer, efectivamente, la promesa de la libre circulación de personas, dos de los pilares de la globalización a la europea.

Es contra esta elite cosmopolita que la mayoría plebeya, en palabras del sociólogo Craig Calhoun, “se amotinó”⁹. El voto *Leave* encontró un amplio respaldo entre las clases trabajadoras, especialmente en las zonas des-industrializadas del noreste inglés y el sur de Gales. Poco queda en estas regiones de la estable prosperidad conseguida en los años de posguerra, cuando minas de carbón y astilleros empujaban la economía. Aquí, las políticas de austeridad post-crisis de 2008 cayeron sobre una economía ya debilitada desde los años de Thatcher y fuertemente dependiente de subsidios fiscales. Lo más llamativo, sin embargo, es que estas zonas donde ganó ampliamente el apoyo al *Brexit* constituían bastiones históricos del Laborismo¹⁰, siendo Doncaster, Hartlepool o Sunderland algunos de los casos más emblemáticos. Ni toda la clase obrera ni todo el electorado Laborista optó por el *Brexit*, claro está. Pero la porción que de ambos arrancó la nacionalista campaña del *Leave* inclinó la balanza para producir un cambio histórico.

II. RETIRADA LABORISTA Y DERECHIZACIÓN DEL CUADRO POLÍTICO

Si algo destacó de la participación del Partido Laborista en la coyuntura del *Brexit* fue su irrelevancia. No es exagerado afirmar que el Laborismo asistió más como un espectador que como un actor a la disputa por los votos y los términos del debate. La explicación más comentada alude al hecho de que la decisión de refrendar la membresía en la Unión Europea vino del primer ministro David Cameron, en un intento por contener el crecimiento del UKIP y el de su propia disidencia euro-escéptica en el Partido Conservador para asegurar su elección en 2015. La jugada, además, le permitía colocar al Partido Laborista en la muy incómoda posición de tener que apoyarlo en la campaña por la permanencia. El Laborismo, de esta forma, quedaba preso de una pelea interna de los conservadores. Se instaló así la imagen del *Brexit* como un engendro de la “muñeca” de Cameron y la derrota de éste, coronada con su renuncia, como un error de “cálculo” político.

Pese a no ser falsa, esta explicación sólo aborda el desenlace de la historia en su dimensión más superficial. Soslaya el proceso de gestación de la fractura que incapacitó al Laborismo de influir significativamente sobre el comportamiento de los sectores sociales que solía representar políticamente. El Partido Laborista fue un espectador del *Brexit* porque su historia reciente es la historia de un partido que, siguiendo a Peter Mair en su estudio sobre el “vaciamiento” de los partidos de masas de Occidente, se retiró de la esfera de la sociedad civil para concentrarse exclusivamente en la esfera del gobierno y el Estado¹¹. De esta forma, a los ojos de su otrora base social y electorado tradicional, se convirtió más en un instrumento de un Estado ensimismado que de la representación de sus aspiraciones vitales.

La historia de esta retirada comenzó con el llamado proceso de “modernización” del partido, que culminó con la victoria de Tony Blair como primer ministro en 1997 pero que se inició en 1983 bajo la conducción de Neil Kinnock. Kinnock postuló que si el Laborismo quería regresar al gobierno, debía moderar su programa para ampliar su base electoral y conquistar el apoyo de las capas sociales que ascendían en la estructura social británica y valoraban positivamente el modelo de crecimiento iniciado

9 Calhoun, C. (2016) *Brexit Is a Mutiny Against the Cosmopolitan Elite*. *New Perspectives Quarterly*, 33(3), pp. 50-58.

10 Davies, W. (2016, 24 de junio). Thoughts on the sociology of Brexit, *Political Economy Research Centre*. Recuperado de: http://www.perc.org.uk/project_posts/thoughts-on-the-sociology-of-brexit

11 Mair, P. (2013) *Ruling the Void. The Hollowing of Western Democracy*, London: Verso.

en los años de Thatcher¹². Expulsó a la tendencia más izquierdista del partido y erradicó del programa aquellos puntos que, según las encuestas, habían perdido más popularidad entre los votantes: la nacionalización de la banca y el compromiso con el desarme nuclear unilateral. De este periodo data también el giro pro Unión Europea.

Los primeros beneficios electorales de la “modernización” fueron modestos y fue solo cuando los herederos más radicalizados de Kinnock retomaron el control del partido que el Nuevo Laborismo se expresó en plenitud. Con Tony Blair a la cabeza, el Partido Laborista abandonó los planes de renacionalizar las industrias privatizadas por Thatcher y las estrategias keynesianas para asegurar el pleno empleo, para en cambio comprometerse con mantener bajos los impuestos y la inflación. Logró quitarle electorado al partido Liberal-Demócrata e incluso al Conservador y con ello volver al gobierno¹³. La propia institucionalidad del partido mutó en el proceso. El sistema de votación por bloques de afiliados para elegir candidatos al Parlamento y representantes en las conferencias del partido fue progresivamente reemplazado por el sistema de “un miembro, un voto”. En nombre de la democratización interna, este sistema minó la influencia de los sindicatos dentro del partido y aumentó la de sus parlamentarios y políticos profesionales.

El Nuevo Laborismo apostó a darle al partido “autonomía” de los sindicatos y a distanciarse de sus reivindicaciones. Esto también significó pasar a depender financieramente más de recursos públicos que de los aportes de los sindicatos afiliados. Célebre por lo ilustrativa de este giro fue la respuesta que Gordon Brown, siendo ministro de Blair, dedicó a la propuesta de restaurar el vínculo entre pensiones y salario promedio de los trabajadores:

“No voy a ceder ante la propuesta que llegó de los líderes sindicales (...) Es deber del país juzgar, no es deber de un pequeño conjunto de mociones [en la conferencia del partido] el decidir la política de este gobierno y de este país. Es deber de toda la comunidad, y yo estoy escuchando a toda la comunidad”¹⁴.

Bajo el Nuevo Laborismo, el Partido Laborista terminó de recorrer el camino que lo llevó de ser el partido de la clase trabajadora británica a convertirse en lo que el sociólogo Otto Kirchheimer llamó un partido “atrapa-todo”¹⁵, uno que, privilegiando el rendimiento electoral inmediato a costa de las reivindicaciones de su base social, pasa a apelar a una audiencia más amplia para proteger su permanencia en el Estado. Este proceso derivó en una profunda transformación de la identidad política y estrategia Laborista. En línea con lo observado por Mair en los tradicionales partidos de masas del resto de Europa, el Laborismo británico estrechó su distancia programática con sus oponentes tradicionales, los conservadores, cifrando las diferencias en cuestiones de método y eficiencia antes que de fines. Puso así la conquista del “votante medio” como la piedra angular de su estrategia para situarse en el “centro político”.

La paradoja de esta estrategia es que el partido, al mismo tiempo que busca “ocupar” el centro político, lo modifica. “Moviendo al Laborismo hacia el centro, esta estrategia crea un nuevo centro a la derecha del antiguo: un nuevo centro que, según dicta esta estrategia, el partido debe a su vez pasar a ocupar”, señala Robin Archer, añadiendo que esta estrategia “tiene el efecto de gradualmente mover el centro de la opinión pública cada vez más hacia la derecha y consigo al propio Laborismo en su búsqueda”¹⁶. Archer recuerda que las encuestas de la *British Social Attitudes* muestran que las actitudes públicas en el Reino Unido, incluyendo las de los adherentes del Partido Laborista, se han movido progresivamente hacia la derecha durante los años del Nuevo Laborismo (no así durante Thatcher) en una serie de preguntas sobre Estado de bienestar, intereses comerciales, desigualdad económica y acción estatal. El reporte de 2010 de esta encuesta concluyó que “al reposicionarse ideológicamente, el Nuevo Laborismo contribuyó a asegurar que el terreno ideológico de la opinión pública británica adquiriera un carácter más conservador”¹⁷.

12 Heath, A., Jowell, R. y Curtice, J. (2001) *The Rise of New Labour: Party Policies and Voter Choices*, Oxford: Oxford University Press.

13 *Ibid.*

14 White, M. (2000, 28 de septiembre). Angry Brown defies unions, *The Guardian*. Recuperado de: <https://www.theguardian.com/politics/2000/sep/28/uk.labourconference8> [La traducción al español es mía]

15 Citado por Mair, P. *Op Cit.*

16 Archer, R. (2011). Leading Labour. *Renewal: a Journal of Labour Politics*, 19(1), pp. 5-9.

17 Park, A, Curtice, J, Thomson, K, Phillips, M, Clery, E. y Butt, S. (editores) (2010) *British Social Attitudes: The 26th Report*,

III. RECHAZO A EUROPA COMO RECHAZO A LAS ELITES

Las políticas de austeridad aplicadas tras la crisis financiera de 2008 incrementaron los costos sociales de los problemas estructurales del modelo británico: estancamiento de los salarios y las pensiones, inestabilidad del empleo, encarecimiento de las viviendas, deterioro de los servicios públicos y agudización de las desigualdades, entre otros. Se produjo así una crítica coyuntura histórica, en la que las ideas neoliberales consagradas en la política y la economía entraron en descrédito después de haber hegemonizado la política británica de los últimos 30 años. En este contexto, sin embargo, el Partido Laborista poco hizo por ir a la raíz de los problemas y alterar el balance de poder vigente. Nada significativo impulsó para combatir la desregulación del mercado de capitales, la especulación financiera y la pérdida de control democrático sobre el Estado y la economía.

En lugar de encarar las causas de la crisis y dar voz a la población afectada, el Laborismo persistió en eludirlos y apelar a un abstracto votante medio. Así surgió el “One Nation Labour”, plataforma programática desde la cual el Laborismo enfrentó a la coalición de conservadores y liberal-demócratas desde 2012. Parafraseando al primer ministro conservador Benjamin Disraeli, quien con su “One Nation Conservatism” encaró las crecientes desigualdades económicas en el siglo XIX, los laboristas con Ed Miliband a la cabeza apelaron a unir al Reino Unido como “una sola nación” contra la desigualdad¹⁸. De este modo, ante una crisis causada por los más ricos y que pagaban con altos costos los más pobres, el Laborismo prefirió llamar a todos a esforzarse y cumplir con sus deberes en tanto “británicos”. Es en oposición a esta evasiva estrategia que la figura de Jeremy Corbyn toma fuerza hasta conseguir el liderazgo del partido en 2015, encarnando el primer desafío efectivo a la larga hegemonía del Nuevo Laborismo.

El comportamiento del Partido Laborista durante y después de la crisis de 2008 consagró un sistema político gobernado por el consenso de sus elites dirigentes y carente de una disidencia legítima sustantiva. Mair, de nuevo siguiendo a Kirchheimer, se refiere a esta situación como el “gobierno por cartel”, en alusión a los sistemas políticos en los cuales “ninguna diferencia significativa divide a sus protagonistas, a pesar de lo vigorosamente que pueden competir entre sí a ratos”¹⁹. Aunque un fenómeno largamente incubado en el Reino Unido, el costo de esta dinámica fue excepcionalmente alto en un contexto de crisis económica e implementación de medidas anti-populares. Si el “gobierno por cartel” del bipartidismo conservador-laborista había provocado desinterés en la población durante la década anterior, expresado en la progresiva disminución de la participación electoral y la emergencia de partidos-muleta (como el Liberal-Demócrata o el Verde), en tiempos de crisis estimuló el desarrollo de una oposición no ya a las medidas o a ciertos actores del sistema de partidos, sino que a la política y a los partidos en sí.

Es en relación con este proceso de pérdida de sentido de la política británica que el ascenso del nacionalismo y el euro-escepticismo debe ser comprendido. Es que en paralelo al ensimismamiento del bipartidismo, era el nacionalismo —de larga data y profundo arraigo en la cultura política británica²⁰— el actor que venía creciendo desde la década de 1990 como una oposición frontal al establishment político y una disidencia al sistema de gobierno en sí. Aunque de emerger lento y discontinuo, el Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) avanzó hasta estar en condiciones de incidir significativamente en el proceso que sacó al Reino Unido de la Unión Europea. Y para lograrlo no necesitó un programa claro ni una estructura organizativa importante. Con una presencia marginal en la institucionalidad política, el UKIP ha sido más frontal que laboristas y verdes en el acoso al entramado de políticos y tecnócratas que gobiernan con escasa o nula sensibilidad por los problemas de la mayoría. Se trata de un rasgo transversal a todos los partidos de extrema derecha en Europa. En palabras de Perry Anderson, estos partidos han sido más radicales y coherentes que la izquierda a la hora de oponerse a la elite que echó sobre los hombros de los trabajadores los costos de un capitalismo desbocado²¹.

London: Sage.

18 Gaffney, J., y Lahel, A. (2013). The Morphology of the Labour Party's One Nation Narrative: Story, Plot and Authorship, *The Political Quarterly* 84 (3), pp. 330-341.

19 *Op. Cit.*, 11, p. 114.

20 Véase Nairn, T. (1972). The Left Against Europe?, *New Left Review*, (75), pp. 5-120

21 Anderson, P. (2017) Why the system will still win, *Le Monde Diplomatique*. Recuperado de: <http://mondediplo>.

El UKIP ha hecho precisamente lo contrario que el Partido Laborista: intentar influir desde su programa e identidad sobre las preferencias de los votantes en lugar de relativizar sus banderas para disputar el centro político. De esta forma no ha conseguido importantes victorias electorales (salvo al Parlamento Europeo en 2014, cuya injerencia en el mundo real es muy limitada). Pero en la situación de crisis económica y de representatividad abierta tras la crisis financiera, esta vocación le permitió representar el descontento con las elites que venía gestándose en una sociedad cuyas reivindicaciones no eran canalizadas por el sistema de partidos. Para lograrlo, invocó al inveterado euro-escepticismo británico para ponerlo en contra del que es el constructo de las elites por excelencia: la Unión Europea. Aunque acusado por “faltar a la verdad” en su campaña contra la UE, el UKIP simplemente llevó al extremo la costumbre del bipartidismo conservador-laborista de culpar a Europa por las decisiones tomadas en casa. Esta vez, sin embargo, la Europa efectivamente afectada por la gobernanza no-democrática de la Unión estaba ya en pie de guerra²².

Al estar en la Unión Europea pero no en la Eurozona, el Reino Unido podía fijar su política monetaria y fiscal con mucho mayor libertad que el resto de los estados miembros, incluso considerando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, firmado en 1997 para controlar el recurso al déficit de los Estados. En 2011 el Reino Unido se excluyó de las enmiendas que endurecían el pacto fiscal introduciendo sanciones automáticas a Estados que vulneraran los parámetros permitidos de déficit y deuda. Lo que defendió el gobierno británico, sin embargo, no fue la soberanía nacional sobre su política fiscal, sino el excluir a Londres de la regulación de los mercados financieros y la aplicación de impuestos sobre las transacciones financieras. Mientras la UE efectivamente limita la iniciativa pública disponible para los sistemas políticos nacionales de sus miembros plenos, no tenía ese alcance en el Reino Unido. Éste último no ha necesitado a la Unión Europea para profundizar la desregulación de su capitalismo; en este respecto le lleva la delantera.

Pese a utilizar una retórica basada en la defensa de la soberanía nacional, la preocupación real de las elites conservadoras y nacionalistas tenía que ver con las transferencias de recursos a la UE, la libertad para reducir impuestos y el endurecimiento de las normas migratorias. Se trató, y se trata todavía mientras se negocian los nuevos términos de relación con la UE, de pugnas internas del capitalismo por los términos de incorporación a los mercados y su sujeción al poder político. En realidad, si la ciudadanía británica ha perdido soberanía sobre su Estado, ha sido por el creciente debilitamiento de su democracia, desfinanciada y convertida en deudora por la incontestada hegemonía del capital financiero instalado en la City londinense, y limitada en sus alcances y dinamismo por una elite dirigente que naturalizó la preeminencia de los intereses de “los mercados”²³.

IV. EL FIN DE EUROPA VS. UNA EUROPA DISTINTA

La deriva nacionalista que asumió el rechazo al entramado político-económico dirigente en Reino Unido, pese a asumir la apariencia de una disidencia sustantiva, permitió a las elites dirigentes británicas eludir su responsabilidad en la declinación de la calidad de vida de los trabajadores, la concentración de la riqueza en la cúspide de la sociedad y el deterioro de la democracia. Este resultado da cuenta de la fragmentación de una sociedad en la que, ante la carencia de alianzas sociales y políticas que representen los intereses subalternos, los sectores más postergados acaban encontrando en el nacionalismo y el rechazo a la política el único modo de expresión de hartazgo y disidencia. El *Brexit*, de este modo, neutralizó la emergencia de una impugnación democratizante a las contradicciones del capitalismo avanzado en un momento de crisis económica y de representación política.

Por lo pronto, el agotamiento de la modalidad de inserción del capitalismo británico en la economía global no parece estar en vías de reversión por la salida de la UE. Una impugnación autónoma desde abajo, sin embargo, ha sido momentáneamente descartada. La crisis de representación política se

com/2017/03/02brexit

22 Streeck, W. (2015). Why The Euro Divides Europe. *New Left Review*, (95), pp. 5-26

23 Streeck, W. (2011). The Crises of Democratic Capitalism. *New Left Review*, (71), pp. 5-59

mantiene y una situación de vacío se prolonga. En el Conservadurismo los euro-escépticos han sido incapaces de hacerse cargo de la situación abierta con el abandono de la UE, dejando en manos del establishment conservador el diseño del nuevo pacto con Europa. Un UKIP carente de arraigo en la sociedad y cuadros capaces de hacer algo más que agresivas campañas electorales, en tanto, ha vuelto a su redil de partido accesorio. El Laborismo continúa paralizado por las pugnas internas entre los herederos del Nuevo Laborismo en sus varias versiones y el desafío todavía difuso planteado por Corbyn y la izquierda social, cristalizada en la plataforma Momentum, que entró consigo al partido.

Es este último actor, sin embargo, el que de manera más consistente ha empujado por dar expresión política a las aspiraciones de las mayorías trabajadoras británicas. De su avance parece depender la posibilidad de revertir el largo declive de la política Laborista y enfrentar la corrosión de la democracia británica por la vía de recuperar soberanía para la ciudadanía contra los mercados. De estancarse esta opción, imaginar una Europa distinta será más difícil que imaginar el fin de Europa. ▼

Suscríbete a los **CUADERNOS DE COYUNTURA**



NODOXXI
FUNDACIÓN NODO VEINTIUNO

Recibe en tu domicilio un ejemplar impreso de nuestra publicación bimestral y ayúdanos a seguir generando conocimiento al servicio de la democratización política, social y económica del país.

*Suscripción anual:
desde \$50.000*.
Suscripción mensual:
desde \$5.000*.*

Para concretar tu suscripción

escribenos a:

suscripciones@nodoxxi.cl

** Los valores indicados son el aporte mínimo sugerido. Se aceptan aportes superiores mensuales o anuales según la capacidad económica de cada suscriptor.*

¿QUÉ DATOS NECESITAS PARA HACER TU DEPÓSITO?



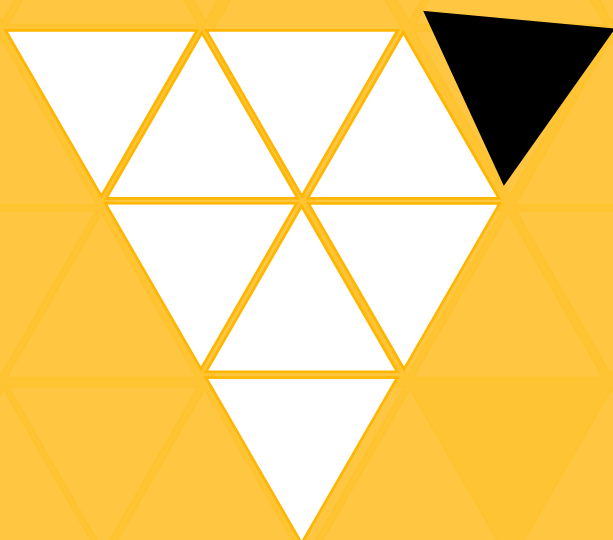
Fundación Nodo XXI - RUT:
65.065.819-1

Cuenta Corriente N°
Banco de Chile: 008000240709

Correo de confirmación:
suscripciones@nodoxxi.cl

¿A QUÉ DESTINAMOS LAS DONACIONES?

- ▼ A la elaboración y difusión de material de estudio sobre problemáticas políticas, sociales, económicas y culturales, con una perspectiva de derechos y un enfoque que destaca por su originalidad y compromiso con el cambio social.
- ▼ A la organización de actividades de formación de masas críticas a través del debate, la deliberación y construcción de miradas colectivas, especialmente en conjunto con organizaciones y movimientos sociales de relevancia nacional.
- ▼ A la elaboración y socialización de propuestas y opiniones relevantes para la apropiación crítica de nuestra realidad, a través de material para medios de comunicación, redes sociales, columnas de opinión y campañas.



NODOXXI

FUNDACIÓN NODO VEINTIUNO

[4]

POLÍTICA Y CULTURA POLÍTICA

La cultura política de la generación 2011

[11]

SOCIEDAD Y FEMINISMO

Lucha feminista: Aportes desde la izquierda militante

[17]

CULTURA E INSTITUCIONALIDAD

Ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio:

Descomposición del debate público vs. ficción participativa

[26]

ECONOMÍA Y SECTOR PESQUERO

Sector pesquero chileno: concentración, desarticulación social y crisis ecológica

[37]

INTERNACIONAL Y GRAN BRETAÑA

Crisis y declive laborista: El camino al Brexit